RESUMEN DEL AÑO

NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA Y ESPACIO CÍVICO

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

A. ACERCA DE ESTE INFORME

Todos los años, el Informe de CIVICUS sobre el Estado de la Sociedad Civil analiza los principales acontecimientos que han involucrado y afectado a la sociedad civil en todo el mundo. Buscamos celebrar nuestros logros como sociedad civil, identificar los desafíos a los que nos hemos enfrentado y evaluar la forma en que los acontecimientos recientes han afectado a la sociedad civil, así como también la manera en que ésta ha respondido. Esta sección del informe se centra en el reciente resurgimiento de las políticas populistas y sus efectos sobre el espacio de la sociedad civil. Otras secciones tratan de la libertad de expresión como parte fundamental del espacio de la sociedad civil, la movilización ciudadana en movimientos de protesta y las acciones de la sociedad civil a nivel internacional.

Nuestro informe es sobre la sociedad civil, y está hecho por y para la sociedad civil. Además de las cuatro partes de revisión de los acontecimientos del último año, nuestro informe tiene una sección especial sobre el tema de este año, la sociedad civil y el sector privado, que incluye 27 contribuciones de activistas, líderes, expertos y actores de la sociedad civil, así como un ensayo temático que se nutre de esas contribuciones. Este informe también se alimenta de las respuestas a la encuesta anual a miembros de nuestro Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA), formado por entidades de coordinación y membresía de la sociedad civil a nivel nacional y regional, y de una serie de entrevistas con integrantes de nuestra alianza que vivieron de cerca las historias más importantes del último año. Estamos muy agradecidos con todos nuestros colaboradores por sus esfuerzos conducentes a la elaboración de este informe.

B. INTRODUCCIÓN

Esta, la sexta edición del Informe de CIVICUS sobre el Estado de la Sociedad Civil, llega en un momento de agitación política generalizada. Como parte de esta agitación, la sociedad civil está siendo atacada como nunca antes. Ha llegado una nueva amenaza proveniente del giro de la política actual hacia la extrema derecha populista y nacionalista. Esto se ve en muchos países donde se había ganado el debate a favor de una democracia constitucional y participativa basada en el imperio de la ley y en el

HA LLEGADO UNA NUEVA AMENAZA PROVENIENTE DEL GIRO DE LA POLÍTICA ACTUAL HACIA LA EXTREMA DERECHA POPULISTA Y NACIONALISTA

marco internacional de los derechos humanos. El CIVICUS Monitor, nuestra nueva plataforma en línea que hace un seguimiento del espacio para la sociedad civil en todos los países del mundo, revela que la sociedad civil se enfrenta a amenazas graves en 106 países, es decir, en más de la mitad de los países miembros de la ONU. Están siendo introducidas nuevas leyes y reglamentaciones para limitar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para formarse y actuar; manifestaciones pacíficas están siendo impedidas por la fuerza y se está deteniendo a manifestantes; y los activistas que se involucran en temas controvertidos son acosados, encarcelados, atacados y asesinados.

El primer Informe sobre la Sociedad Civil, publicado en 2012, analizaba los principales acontecimientos que sacudieron tanto a la sociedad civil como a las instituciones políticas en los primeros años de esta década. Ese también fue un momento de agitación, pero al mismo tiempo fue un tiempo de oportunidades para la sociedad civil. En muchos lugares del mundo, entre ellos el Oriente Medio y el Norte de África (OMNA), Europa y los Estados Unidos, estallaron protestas masivas. Los ciudadanos se movilizaron para exigir más de sus gobiernos, desafiar el poder enraizado de las élites y expresar su indignación por la desigualdad económica, las violaciones de derechos humanos y la falta de medios de subsistencia.

Seis años después, el mundo puede parecer muy diferente. Algún que otro dictador fue derrocado en OMNA, pero las fuerzas represivas reaccionaron con venganza, tanto en dicha región, en la cual el espacio para la sociedad civil está hoy casi uniformemente reprimido y cerrado, como en el resto del mundo. El CIVICUS Monitor muestra que el respeto por los derechos humanos básicos de los cuales depende la sociedad civil – la libertades de asociación, reunión pacífica y expresión – es insuficiente en todas las regiones del mundo.

Es normal que sintamos que el mundo se ha alejado bastante del optimismo que compartimos hacia 2012. En 2012, todo parecía encaminarse en una dirección progresista. Por medio de protestas y campañas, los ciudadanos demandaban sus derechos, instando a la rendición de cuentas y estableciendo conexiones internacionales positivas entre movimientos. En comparación, el panorama de 2017 parece una reacción a aquello. En muchos y diferentes países, los ciudadanos han utilizado el voto para crear shocks políticos, adoptaron posturas más extremistas y depositaron su fe en líderes de línea dura. La agenda política se ha desviado bruscamente hacia la derecha. En muchos de nuestros países el discurso político se ha vuelto más crudo, menos sutil y más racista, sexista y xenófobo. Se ha movilizado un alto nivel de apoyo popular detrás del fortalecimiento de las fronteras, la construcción de muros y la retirada de las instituciones internacionales. Los derechos humanos, el respeto por la diversidad y el internacionalismo están siendo atacados: el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, caracterizó el desprecio por los derechos humanos, impulsado por el populismo y el extremismo en ascenso, como “una enfermedad que se está propagando”.

Estas tendencias negativas se sostienen en patrones de restricción de la sociedad civil, y a su vez los refuerzan. Los líderes de extrema derecha, incluso cabe decir neofascistas, que han llegado al poder en varios países amenazan directamente a la sociedad civil. Cuando es internacionalista, busca defender los derechos humanos y defiende a los grupos excluidos a los que se niega una participación equitativa en el poder, la sociedad civil es atacada por líderes políticos que rechazan

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

dichos valores. Al normalizarse el sexismo, las activistas por los derechos de las mujeres sufren mayores ataques. Cuando los líderes políticos gobiernan en función de los intereses de los grupos de personas que votaron por ellos, en lugar de hacerlo en función del interés del conjunto de la sociedad, el disenso puede ser visto como antidemocrático o contrario a un interés nacional estrechamente definido, y la sociedad civil puede verse restringida en tanto que ofrece plataformas para la disidencia. Cuando se afirman conceptos mezquinos y xenofóbicos, la sociedad civil puede verse limitada por acciones enmarcadas en defensa de la seguridad nacional y los intereses de las mayorías.

Las perspectivas de la sociedad civil pueden parecer sombrías. Pero es importante comprender que el enojo ciudadano que dio forma a las movilizaciones que documentamos en 2012 no es tan diferente del que alimenta la política reaccionaria de hoy. Creemos que la sociedad civil en su conjunto no se ha involucrado adecuadamente, no ha comprendido o no ha intentado dar forma al descontento ciudadano que impulsa la funesta política de hoy. Pero está empezando a hacerlo, y comienza a contraatacar. Puede verse ese potencial de respuesta en las vastas movilizaciones producidas en reacción a cada giro neofascista y en cada intento de reafirmación de los derechos humanos. La lucha aún no ha terminado.

SOLO 26 DE 195 PAÍSES, EQUIVALENTES A TAN SOLO EL 3% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, TIENEN UN ESPACIO CÍVICO TOTALMENTE ABIERTO

PRESENTAMOS EL CIVICUS MONITOR

Por primera vez, el repaso de las tendencias de la sociedad civil de nuestro Informe sobre la Sociedad Civil se alimenta del análisis del CIVICUS Monitor.

El CIVICUS Monitor es una nueva herramienta que evalúa y califica el estado del espacio de la sociedad civil - espacio cívico - en todos los países. Fue lanzado en octubre de 2016, y desde abril de 2017 cubre a todos los países del mundo. El CIVICUS Monitor se alimenta de datos generados por la sociedad civil a partir de una variedad de fuentes y, por medio de un proceso de varias fases de calificación y verificación, confiere a cada país una de las cinco calificaciones de las condiciones del espacio cívico: abierto, estrecho, obstruido, reprimido o cerrado. El CIVICUS Monitor es actualizado con frecuencia y realiza un seguimiento en el tiempo que permite determinar si el espacio cívico en un país está mejorando o empeorando y ayuda a identificar y analizar los factores detrás del cambio.

No resulta sorprendente que la lectura inicial del CIVICUS Monitor sea pesimista: en abril de 2017 se evaluó que solo 26 de 195 países, equivalentes a tan solo el 3% de la población mundial, tienen un espacio cívico totalmente abierto.

Esta restricción generalizada significa que los derechos garantizados por la legislación internacional son rutinariamente denegados.

Para los ciudadanos, esto supone la negación de oportunidades de opinar sobre las cuestiones que les afectan, de modo tal que sus necesidades no son tenidas en cuenta. Existen correlaciones claras entre la calidad del espacio cívico de un país y su desempeño en el Índice de Desarrollo Humano, su nivel de igualdad expresado en el Índice de Gini, y sus estándares de democracia electoral, tal como los captura el Índice de Democracia Electoral de V-Dem. En resumen, la vida es mejor en los países que tienen un espacio cívico abierto. Pero el espacio cívico abierto es la excepción más que la regla.

El CIVICUS Monitor confirma las tendencias relativas al espacio cívico que CIVICUS ha rastreado durante muchos años: deja en claro que las restricciones sobre la sociedad civil se han convertido en la norma, más que en la excepción. Estas están ocurriendo en todo el mundo, tanto en el sur global como en el norte global, y en cada región: aunque se observa con mayor intensidad en países de África y Asia, la obstrucción del espacio cívico ha avanzado en todos los continentes. Las restricciones se están produciendo tanto en países con sistemas políticos democráticos relativamente afianzados como en países con instituciones débiles; en países con distintas historias coloniales y niveles de desarrollo económico; en países con gobiernos que abarcan todo el espectro político desde democracias a autocracias; y en países gobernados por líderes de todas las creencias políticas. Es evidente que la restricción del espacio cívico es una realidad global, y debe por lo tanto ser tratada como una emergencia global.

C. COMPRENDER LA HISTORIA Y LA DINÁMICA DE LA RESTRICCIÓN

El último año trajo consigo un nuevo reconocimiento de cuán prevalente y sostenido es ahora el ataque contra la sociedad civil. En su Informe sobre los Riesgos Globales 2017, el Foro Económico Mundial reconoció por primera vez la creciente restricción del espacio cívico como amenaza a la estabilidad social, política y económica.

Sin embargo, la restricción de la sociedad civil no es algo nuevo. Las tendencias actuales refuerzan y se sostienen sobre un ataque contra la sociedad civil que ha venido ocurriendo durante años, tal como lo hemos rastreado en sucesivas ediciones de este informe. Es importante comprender la historia y la dinámica de la restricción del espacio cívico para rastrear algunos puntos de inflexión importantes que han cambiado sensiblemente las condiciones para la sociedad civil, tales como el entorno de seguridad posterior al 11 de septiembre, el surgimiento de China y la difusión de nuevas tecnologías. Nuestro análisis a lo largo de los años ha rastreado algunos de los factores clave que han impulsado y facilitado la restricción de la sociedad civil que hoy las tendencias políticas regresivas no hacen sino reforzar:

- el creciente énfasis global en la lucha contra el terrorismo y la correlativa preocupación por la seguridad y la estabilidad, que han permitido a algunos estados restringir a la sociedad civil en nombre de la lucha contra el terrorismo, impulsado la equiparación entre disenso y terrorismo, y alentado a los estados a contemplar el respeto de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo como opciones disyuntivas;
- más recientemente, pero de manera similar, una reacción adversa en el norte global, en particular contra migrantes y refugiados, que se ha traducido en un

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

renovado énfasis en medidas tendientes a limitar los flujos de personas, más que a hacer valer sus derechos o abordar las violaciones de derechos humanos de las cuales podrían estar huyendo;

- la reacción contra los éxitos pasados de la sociedad civil: por ejemplo, el potencial de movilización demostrado en OMNA y otros lugares en los primeros años de esta década puso a muchos estados a la defensiva y llevó a la introducción de medidas preventivas, al tiempo que el éxito de la sociedad civil en la utilización de los nuevos medios de comunicación para movilizar, organizar y promover causas se tradujo en ataques sobre el espacio cívico online;
- el surgimiento de nuevas fuentes de apoyo internacional para los estados, particularmente de China, que no establece condiciones en materia de derechos humanos, y favorece la financiación de proyectos de desarrollo de infraestructura de gran escala, que pueden afectar aún más los derechos humanos y a la sociedad civil que defiende esos derechos;
- el cambio de forma de la asistencia para el desarrollo, con algunas agencias donantes establecidas que reorganizan sus agendas alrededor de ventajas comerciales y diplomáticas, además de prioridades de seguridad y antiinmigración, y ponen menos énfasis en la materialización de los derechos de la sociedad civil;
- el auge de las empresas transnacionales, incluidas las industrias extractivas y financieras y la externalización de las cadenas de suministro de manufactura a países del sur global: tal como se analiza en la sección temática de este informe sobre sociedad civil y sector privado, las empresas en gran escala pueden tener un impacto negativo sobre los derechos humanos de las comunidades y la sociedad civil que defiende a las comunidades y están en condiciones de resistir las presiones para la rendición de cuentas y el control democrático.

Estos factores a menudo interactúan y se amplifican entre sí, lo que sugiere la necesidad de un análisis contextual profundo de los elementos que impulsan la presión sobre la sociedad civil en un país determinado. Además, los actores que atacan y restringen a la sociedad civil pueden variar según el contexto. Las amenazas pueden provenir de líderes políticos, incluidos políticos locales y dirigentes de partidos extremistas; grupos políticos y religiosos extremistas, entre ellos grupos terroristas o del crimen organizado; fuerzas de seguridad estatales y del sector privado que no rinden cuentas a nadie ; y grandes corporaciones. Existe también una conciencia creciente de los efectos que tiene sobre el espacio cívico el discurso de odio diseminado por *trolls* en Internet - algunos de ellos organizados, muchos otros actuando a título individual. Las conexiones entre estas distintas fuerzas regresivas, a menudo caracterizadas por redes de corrupción e ilegalidad, son muy peligrosas para la sociedad civil.

A pesar de ello, el análisis de los datos del CIVICUS Monitor muestra que la fuente fundamental de restricciones sobre la sociedad civil sigue siendo el Estado. El Estado restringe a la sociedad civil sobre la base de una serie de motivos y echando mano a una variedad de tácticas. Estas han sido claramente identificadas y delineadas, e incluyen:

- la introducción de nuevas leyes restrictivas para limitar el modo en que la sociedad civil puede constituirse, actuar, informar sobre sí misma y recibir fondos, tales como las aprobadas en 2016 en Bielorrusia,China y Egipto;
- la suspensión o cierre forzado de OSC, o los intentos de hacerlo, observados recientemente en Benín, Ecuador e Irak;

- procesos judiciales tendenciosos y viciados que impiden que activistas y organizaciones lleven adelante sus mandatos, como sucedió recientemente en Armenia, Irán y Zimbabwe;
- el vilipendio de miembros de la sociedad civil a través de agresiones verbales y discursos de odio, como las instancias observadas el año pasado en Camboya , Polonia y Tanzania;
- medidas para cerrar el espacio online, con casos como los de Bangladesh, Lesoto y Omán;
- la imposición de restricciones o prohibiciones de viajar sobre miembros de la sociedad civil, experimentada por activistas en Azerbaiyán, India y Sudán;
- la negación del derecho de protesta pacífica, a menudo por medios violentos, como sucedió en Chile, Etiopía y Kazajistán;
- arrestos, encarcelamientos y detenciones arbitrarias, como en Bahréin, la República Democrática del Congo (RDC) y Venezuela;
- el uso de la fuerza, tanto la sancionada por el Estado como la extrajudicial, incluyendo ataques físicos y asesinatos, en particular en Honduras, Kenia y Ucrania.

Es posible ofrecer muchos ejemplos más. Según el CIVICUS Monitor, entre junio de 2016 y marzo de 2017 las principales formas en que se violó el espacio cívico fueron las siguientes:

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

- detención de activistas (160 informes entre junio de 2016 y marzo de 2017)
- interrupción de protestas (113 informes)
- uso excesivo de la fuerza contra protestas (112 informes)
- ataques contra periodistas (101 informes)

Estas tácticas son aplicadas una y otra vez, combinadas en distintas medidas e inspiradas en un país para ser utilizadas en otro.

Las restricciones operan mediante la absorción de la energía de la sociedad civil, la limitación del margen de acción de los líderes de OSC y el efecto disuasorio. Con demasiada frecuencia, las energías de la sociedad civil son absorbidas por el cumplimiento de requisitos cada vez más exigentes, en la medida en que leyes y reglamentos introducen crecientes regulaciones, y por la búsqueda de recursos para sustentarse en contextos en que los estados han vuelto cada vez más difícil la recepción de fondos de fuentes internacionales por parte de las OSC. El hostigamiento y la detención de activistas y periodistas, el discurso de odio y la violencia pueden estimular la autocensura y la retirada hacia actividades de menor exposición.

CIERRE FORZOSO: LA EXPERIENCIA DE ECUADOR

En agosto de 2016, el Ministro de Educación de Ecuador disolvió la organización de docentes más importante del país, la Unión Nacional de Educadores (UNE). El sindicato fue cerrado con el argumento de que había violado sus propios estatutos así como la ley sobre organizaciones sociales, pero según la opinión de Rosana Palacios Barriga, presidente de la UNE, se trató de una decisión política. El conflicto entre el sindicato y el Estado comenzó cuando el sindicato instó al entonces presidente Rafael Correa a adherir al plan de diez años para la educación que había sido acordado en un referéndum en 2006; el sindicato demostró su poder en una huelga nacional de 2009 que logró detener una serie de cambios propuestos. Según explica Rosana, el cierre forzoso fue la culminación de una serie de maniobras destinadas a recortar el poder de la UNE, como parte de un patrón más amplio de limitación de la libertad de asociación y la capacidad de expresar disenso en Ecuador, una tendencia especialmente visible en el periodo previo a las elecciones de febrero de 2017[1]:

> *La disolución de la UNE es parte de una fórmula que responde al objetivo central del régimen de eliminar toda forma de organización y participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas públicas, la defensa de derechos humanos y la promoción de las libertades públicas. O sea, es parte de una estrategia para mantenerse en el poder.*

[1] Extracto editado de una entrevista realizada en marzo de 2017. La entrevista completa está disponible en http://bit.ly/2oyGr2V.

En su afán por eliminar a nuestra organización, y más en general a todas aquellas que no siguieran sus mandatos, así como de dominar a las restantes, el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo No. 16 del 4 de junio de 2013 (Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas). Este decreto recibió el rechazo unánime de la sociedad civil independiente, ya que era violatorio de la libertad de asociación. El decreto estableció nuevos procedimientos y requisitos para el reconocimiento legal de organizaciones de la sociedad civil e introdujo un proceso de evaluación para autorizar a ONGs internacionales para operar en el país. También exigió que las ONGs ecuatorianas se volvieran a registrar, impuso requisitos excesivos de información que podrían ser utilizados contra las propias organizaciones, y otorgó al gobierno amplia discrecionalidad para rechazar peticiones de reconocimiento jurídico o disolver organizaciones con argumentos vagos vinculados con el desvío de sus objetivos declarados, el involucramiento en actividad político-partidaria, la interferencia con las políticas públicas o la afectación de la seguridad del Estado o la paz pública.

Gracias al apoyo de la sociedad civil, organizaciones sindicales, organizaciones de servidores públicos y organismos internacionales como la Federación Sindical Mundial y la Internacional de la Educación, logramos llegar hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas para denunciar el Decreto Ejecutivo No. 16. En Ecuador, además, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad del decreto ante la Corte de Justicia. La primera víctima de disolución a partir de la aplicación del Decreto No. 16, a fines de 2013, fue la Fundación Pachamama,una organización ambientalista.

Entretanto, el gobierno utilizó una táctica de desgaste mediante criminalización contra los dirigentes de la UNE. Mery Zamora, presidenta de la UNE entre 2007 y 2010, fue acusada de sabotaje y terrorismo por supuestamente haber incitado a los alumnos de un colegio a salir a las calles durante la revuelta policial de 2010. Fue hallada culpable gracias a la presentación de pruebas falsas y condenada a ocho

Daniel Cima Accion Ecologica.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

años de prisión. Si bien en instancia de apelación fue eventualmente declarada inocente y no debió cumplir pena, la Fiscalía de la Nación enseguida volvió a presentar nuevas acusaciones contra ella, por supuestamente haber atentado contra los derechos del Estado.

Otros dirigentes nacionales fueron encarcelados durante un año. Decenas de dirigentes provinciales y cantonales fueron destituidos. Hubo cantidades de sumarios administrativos contra maestros que declararan pertenecer a UNE, y muchos fueron removidos de sus funciones o de sus sitios de trabajo.

Los nuevos dirigentes de la UNE, elegidos para el período 2013-2016, incluida yo misma, no fuimos reconocidos. El Comité Electoral de UNE argumentó la ilegalidad de esta actuación, pero durante casi un año enfrentó el silencio administrativo, y por último recibió la respuesta de que la documentación requerida no había sido entregada. Presumimos que los documentos entregados fueron deliberadamente extraviados.

En 2015 el Ministerio de Educación creó una organización paralela, llamada Red de Maestros por la Revolución Educativa, que no cumplía con ninguno de los parámetros que le eran exigidos a la UNE. Esta iniciativa violó los estándares internacionales, empezando por el Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.

Las autoridades educativas intervinieron para obligar a los maestros, mediante mecanismos ilegales, a afiliarse a la nueva organización. Al mismo tiempo impedían el acceso de la dirigencia de la UNE a los planteles educativos. De hecho se emitieron oficios circulares bajo pena de sanción para las autoridades que dejaran ingresar a los establecimientos a dirigentes de UNE, permitieran a los maestros reunirse en asambleas, asistieran a las instalaciones de su gremio o permitieran la diseminación de información sobre la situación del magisterio. Por último, la autoridades se apropiaron del Fondo de Cesantía del Magisterio ecuatoriano, la entidad financiera de la UNE, con una caja de 405 millones de dólares.

El gobierno ha creado organizaciones paralelas en otros sectores, como el FUE (Frente de Estudiantes Universitarios del Ecuador), el FESE (Frente de Estudiantes Secundarios del Ecuador) y Seguro Campesino. Para enfrentar a las centrales sindicales tradicionales se creó en 2014 la CUT (Central Unitaria de Trabajadores), afín al gobierno, y lo mismo en

ESTA INICIATIVA VIOLÓ LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, EMPEZANDO POR EL CONVENIO 98 DE LA OIT SOBRE EL DERECHO DE SINDICACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

el terreno de los movimientos de mujeres, los movimientos ecologistas y las organizaciones defensoras de la tierra. Al mismo tiempo que estas nuevas organizaciones eran movilizadas, se instituyeron leyes anti obreras para criminalizar la lucha social y se utilizaron los aparatos represivos del Estado contra las organizaciones genuinamente representativas.

El temor es que la UNE no sea la última OSC cerrada por la fuerza. En el momento de redacción del presente informe se estaban encarando acciones para cerrar Acción Ecológica, una OSC que trabaja sobre el impacto ambiental de la industria minera, un tema políticamente sensible en Ecuador. Además, el gobierno ha presentado un proyecto de ley para introducir regulaciones adicionales en materia de registro y disolución de OSC.

Estas restricciones no afectan del mismo modo a todas las OSC. Las organizaciones y activistas están más expuestos a padecer restricciones cuando se dedican a denunciar el mal desempeño y la corrupción del Estado y a exigir democracia y rendición de cuentas; cuando adoptan posturas que son consideradas controvertidas por razones de seguridad nacional, estabilidad o moral pública; cuando exigen la vigencia de los derechos humanos y llaman la atención sobre su violación; cuando reclaman por los derechos de grupos excluidos, exigen una distribución más justa del poder y la riqueza, y cuestionan el impacto y las prácticas laborales de las grandes corporaciones. Por ejemplo, el CIVICUS Monitor indica que la mayoría de las detenciones de activistas de la sociedad civil tienen lugar cuando se les percibe como desafiantes o críticos de las instituciones, políticas y funcionarios del Estado y cuando promueven los derechos humanos o llaman la atención sobre su violación.

Organizaciones y activistas sufren menos restricciones cuando dan prioridad a actividades de caridad o bienestar social, y cuando se dedican a prestar servicios. Esta brecha se observa por ejemplo en Tanzania, donde Kepa Tanzania, miembro de AGNA, destaca que el Estado trata a la sociedad civil de manera diferente según las actividades que realice[2]:

Hay una gran participación de OSC que prestan servicios y de las que trabajan sobre género y derechos de las mujeres y niños, que son consultadas a menudo en el proceso de formulación de políticas, programas gubernamentales y otros eventos organizados por el gobierno. Por otro lado, existe una mala relación con las OSC que trabajan en defensa de derechos sobre la tierra, defendiendo los derechos humanos y a los defensores de los derechos humanos, y sobre gobernanza.

Durante los últimos diez años, hemos experimentado relaciones positivas y abiertas entre el gobierno y las OSC. Las OSC participaron en procesos de toma de decisiones, por ejemplo en el proceso de revisión de la constitución. La

[2] Todas las contribuciones del Grupo de Afinidad de Asociaciones Nacionales (AGNA, por sus siglas en inglés) a este informe son extractos editados de una encuesta administrada a los miembros de AGNA entre diciembre de 2016 y marzo de 2017. Las respuestas completas serán publicadas por separado.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

Grzegorz Żukowski

situación cambió durante y después de las elecciones generales de octubre de 2015, y continúa hasta el día de hoy. La relación entre las OSC que realizan actividades de promoción de los derechos humanos y el gobierno está empeorando debido al nuevo liderazgo, que no acepta críticas.

En respuesta a ello, en marzo de 2017 las OSC de Tanzania lanzaron una campaña de un año para instar al Estado a respetar las libertades de la sociedad civil.

Asimismo, en Nepal el papel creciente de la sociedad civil en la incidencia y la concientización sobre asuntos de rendición de cuentas y gobernanza está comenzando a generar cierta desconfianza y negatividad por parte de los funcionarios políticos, según la Federación de ONG de Nepal, también integrante de AGNA:

En general, las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno no son malas. Pero los partidos políticos, los funcionarios y la burocracia tienen actitudes en cierta medida negativas hacia las OSC. Los funcionarios del gobierno comenzaron a percibir a las OSC como una amenaza más que como colaboradores. Muchas OSC están trabajando en incidencia en política

pública y en funciones de control, lo cual no es tomado de manera positiva por los funcionarios del gobierno. Debido a la inestabilidad del gobierno, las agencias gubernamentales no han sido capaces de ofrecer bienes y servicios que satisfagan las aspiraciones de la gente y son incapaces de responder a sus demandas. Pero en cambio, el nivel de conciencia ha crecido de forma continua en el país y el nivel de demanda de rendición de cuentas y buena gobernanza es cada vez mayor. Los líderes políticos y los burócratas culpan de ello a las OSC.

Los grupos de la sociedad civil pueden ser tolerados cuando no critican al Estado y a los que detentan el poder político; pueden incluso ser alentados, cultivados y recompensados con mecenazgo cuando toman líneas pro-gobierno. La intención es a menudo dividir a la sociedad civil en un campo que es caracterizado como a favor del desarrollo, la estabilidad y la unidad nacional, y uno que es caracterizado como hostil. Aunque la diversidad de la sociedad civil debe ser reconocida como una de sus grandes fortalezas, es preciso tener claro que la sociedad civil que el mundo necesita es la que defiende y promueve los derechos humanos y persigue un cambio positivo. Existen formas de sociedad civil retrógradas y conservadoras y los estados pueden alentar dichas formas -como en el ejemplo de Polonia, cubierto en la tercera parte de este informe- pero es la sociedad civil progresista la que está bajo ataque y a ella se refiere este informe.

Como en el ya mencionado ejemplo de Ecuador, y según informa la Coordinadora Civil, integrante de AGNA en Nicaragua, en los peores casos los estados intentan establecer una pseudo sociedad civil paralela y cautiva, lo cual puede alimentar la autocensura de la sociedad civil:

Hay una percepción de que el gobierno mantiene su estrategia de establecer organizaciones paralelas a las de la sociedad civil, creando división, promoviendo contradicciones internas y escatimando recursos a organizaciones independientes. Las normas administrativas son violadas flagrantemente por las instituciones del gobierno y entes autónomos, todos los cuales ejercen presión y acoso administrativo. Esto ha provocado desestabilización económica, miedo, silencio y autocensura en muchas de las organizaciones que antes eran promotoras de derechos humanos - organizaciones que trabajaban en temas como educación, derechos de la niñez, derechos de mujeres y trabajadores, diversidad sexual y libertad de pensamiento.

Hay un miedo latente y silencioso en la ciudadanía, lo cual la está inhibiendo de participar en las movilizaciones e incidir en los espacios de participación de gobiernos locales e instituciones autónomas. Por ejemplo, diez años atrás las ONG participaban en el espacio denominado consejo municipal, en comisiones de la niñez y en redes locales de lucha contra la violencia. En estos momentos únicamente participan instituciones del Estado y organizaciones claramente alineadas con el partido de gobierno. El gobierno organiza grupos grandes de ciudadanos pagados y movilizados con recursos del Estado nicaragüense para realizar actos políticos en plazas y sedes oficiales. Estos están integrados principalmente por jóvenes de ambos sexos, menores de 20 años.

Un similar aislamiento de la sociedad civil independiente se observa en Venezuela, que está polarizada políticamente y carece de instituciones estatales neutrales, informa Sinergia, también miembro de AGNA:

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

Casi desde el inicio del mandato del difunto presidente Hugo Chávez, las relaciones entre el gobierno nacional y las OSC venezolanas experimentaron un franco y gradual deterioro que se agravó en 2009, con la promulgación de un conjunto de leyes sobre las que se sustenta el llamado 'Estado Comunal'.

La marcada postura doctrinaria del gobierno, la intervención cada vez más patente de los militares en la vida cívica, y la negativa del gobierno a generar espacios de concertación sobre la base de la tolerancia con quienes no comparten las posturas ideológicas que proclama, y que intenta implementar a través del uso discrecional de los recursos del Estado, han resultado en una creciente segregación de las OSC autónomas dedicadas a la incidencia y la promoción de la acción ciudadana.

En resumen, en diversos contextos quienes mueven los hilos del poder estatal están librando una guerra contra el disenso. La sociedad civil es menos tolerada cuando funciona como ámbito de expresión del disenso, donde tiene lugar el debate y se articulan alternativas. El análisis del CIVICUS Monitor también indica que bajo condiciones de conflicto o polarización política es más lo que está en juego, lo cual aumenta las probabilidades de que los activistas sean detenidos: en condiciones de polarización, cualquiera que no tome partido por el Estado corre el riesgo de ser asociado con la oposición. Cabe señalar que en estos casos es el Estado, y no la sociedad civil, el que considera que ésta está desempeñando un papel político.

En muchos países. las restricciones también se incrementan antes, durante e inmediatamente después de las elecciones. Esto se observó en 2016 en Gabón, Macedonia y, en un caso tratado en la segunda sección de este informe, en Zambia. La tendencia se mantuvo en 2017 en Ecuador, Turkmenistán y Gambia, también incluidos en la segunda sección de este informe, y en el referéndum turco, que se analiza a continuación.

LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN: HALLAZGOS DE UN PROGRAMA DE AUTOEVALUACIÓN DE TRES AÑOS

Una forma de sofocar la energía y la iniciativa de la sociedad civil es mediante la imposición de reglamentaciones burocráticas. Estas tienen el efecto de hacer que las OSC dediquen tiempo y recursos al cumplimiento de requisitos, distrayéndolas de lo que deberían ser sus principales preocupaciones: la consecución de sus misiones y el servicio a sus beneficiarios. En los peores casos, las leyes y reglamentaciones pueden agotar la capacidad de las OSC para recibir fondos e incluso, como en el ejemplo de Ecuador, forzar el cierre de OSC.

UNA FORMA DE SOFOCAR LA ENERGÍA Y LA INICIATIVA DE LA SOCIEDAD CIVIL ES MEDIANTE LA IMPOSICIÓN DE REGLAMENTACIONES BUROCRÁTICAS

[3] Los 22 países de la ENAH fueron Benín, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Colombia, Honduras, India, Jordania, Líbano, México, Mozambique, Nepal, Nigeria, Panamá, Filipinas, Sudáfrica, Tayikistán, Túnez, Uganda y Zambia.

En 2016, la sociedad civil en 22 países de África, las Américas y Asia concluyó una primera ola de autoevaluaciones a nivel nacional centradas en el ambiente habilitante para la sociedad civil.[3] En todos los países, la sociedad civil aplicó la herramienta Evaluación Nacional del Ambiente Habilitante (ENAH), creada por CIVICUS y el Centro Internacional para la Ley sin Fines de Lucro (ICNL, por sus siglas en inglés). La sociedad civil de cada país siguió una metodología común para evaluar el entorno en que se desempeña la sociedad civil, incluyendo la vigencia efectiva de las libertades de asociación, reunión y expresión, las relaciones con el Estado y la asignación de recursos a la sociedad civil. Las ENAH se concentraron en particular en el impacto de las leyes y reglamentaciones relativas a la sociedad civil. Ninguno de los 22 países que participaron en la ENAH es clasificado por el CIVICUS Monitor como de espacio cívico totalmente abierto; en la mayoría de los casos, el espacio cívico es calificado como obstruido o represivo.

Tomados en conjunto, los informes de la ENAH muestran que raramente se siguen las mejores prácticas internacionales en materia de regulación de las OSC. Los derechos reconocidos en el derecho internacional suponen que a nivel nacional las OSC deberían ser libres para conformarse y funcionar de manera independiente, sin tener que consultar, informar u obtener la autorización de las agencias estatales.

Sin embargo, en varios países existen regímenes de notificación en virtud de los cuales las OSC deben notificar a las agencias estatales en momentos clave de su ciclo de vida, incluidos el momento de conformación, el inicio de actividades, la realización de reuniones y la recepción de recursos. Peor aún, en algunos países las OSC deben solicitar autorización del Estado para realizar estas actividades. En muchos países, las OSC no son libres de actuar sin el permiso del Estado, incluso cuando en el papel existen regímenes de mera notificación: las agencias, funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado se exceden en sus atribuciones e interpretan el requisito de notificación como poder de veto.

En términos más generales, en el conjunto de la investigación de la ENAH las OSC consideraron que las leyes y reglamentaciones que las gobiernan están lejos de habilitarlas, socavando las disposiciones constitucionales que dicen reconocer la importancia de la participación ciudadana. Si bien parte del problema es que los regímenes legales y reglamentarios pueden ser fragmentarios, incompletos y desactualizados, en muchos contextos la situación se ha visto agravada por cambios recientes.

En los últimos años han sido aprobadas en varios países leyes que empeoran el entorno de la sociedad civil mediante la restricción de derechos fundamentales. A menudo estas restricciones son introducidas por razones de protección de la seguridad nacional y el orden público y prevención del terrorismo, pero tienen el efecto de entorpecer la formación y el funcionamiento de las OSC. En algunos países, el Estado insiste en que para que recibir recursos las OSC deben alinearse con las prioridades nacionales de desarrollo, lo cual socava la autonomía de la sociedad civil. En el conjunto de los países de la ENAH fueron recientemente aprobadas más leyes incapacitantes que leyes habilitantes.

Las leyes y reglamentaciones incapacitantes dejan margen para la interpretación selectiva y politizada: por ejemplo, permiten que las OSC que trabajan en temas considerados controvertidos o hacen cuestionamientos molestos sean blanco de acoso. En los peores casos, la introducción de restricciones sobre el entorno de las

OSC delata un intento deliberado por parte de los estados de limitar el papel que pueden desempeñar las OSC y los temas sobre los que pueden trabajar, así como de limitar su autonomía y obstaculizar su eficacia.

Lo que han dejado en claro los centenares de OSC que han participado en la investigación de la ENAH en los 22 países es que no pretenden un ámbito libre de reglamentación, y que no necesariamente desean trabajar en forma aislada del Estado. Muchas OSC quieren trabajar en sociedad con el Estado, pero desean hacerlo como verdaderos socios más que como socios junior con contrato precario; desean ser libres de definir sus propias agendas y rendir cuentas a los grupos a los que representan al mismo tiempo que colaboran con el Estado, trabajando sobre agendas compartidas y acercando la voz de los ciudadanos al Estado.

Las OSC darán la bienvenida a leyes y reglamentaciones que genuinamente habiliten y reconozcan el importante papel que las OSC juegan en la sociedad, y en la medida en que ayuden a las OSC a demostrar su legitimidad y a distinguirlas de las falsas OSC. Sobre todo, las OSC quieren leyes y reglamentaciones que sean predecibles, cumplibles, transparentes y libres de interferencias políticas. La realidad actual suele estar bastante lejos de este ideal.

D. LA NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA: UN RENOVADO ATAQUE CONTRA LOS DERECHOS

Lo que ha cambiado en tiempos recientes no es tanto el origen o las tácticas de ataque contra la sociedad civil, sino más bien la confianza con que operan esos ataques y los contextos en que tienen lugar. Quienes reprimen las libertades de asociación, reunión y expresión lo hacen ahora de manera más descarada. Y lo hacen en países con democracias consolidadas al igual que en democracias frágiles y en estados no democráticos.

En muchos países se ha constituido un proyecto político consciente, en los peores casos de inspiración neofascista, para revocar expectativas de larga data sobre el funcionamiento de las democracias. Este proyecto menosprecia el internacionalismo y rechaza los ideales de los derechos humanos y la justicia social, incluso cuando estos están consagrados en constituciones y acuerdos internacionales que los estados han suscrito por largo tiempo. Se organiza en torno a ideas nacionalistas cortas de miras y cargadas étnicamente. Rechaza los intentos de cuestionar la exclusión y alentar el respeto de los derechos humanos y la diversidad como exponentes de la "corrección política" o "alardes de virtud": un intento de promocionar valores cosmopolitas y globalistas que es innecesario, inútil o alejado de los supuestos puntos de vista de la mayoría de la población. De modo similar, la acción sobre el cambio climático es menospreciada como una amenaza a la libertad y el crecimiento económico. Este proyecto prioriza el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo, cuanto menos para grupos poblacionales largamente establecidos, ya que no para los inmigrantes más recientes; el mecanismo para lograrlo suele ser la eliminación de las restricciones sobre las empresas, junto con el endurecimiento de los controles inmigratorios.

Los representantes de este proyecto forman una nueva élite de dirigentes políticos, que ha emergido para tomar el poder desde las papeletas electorales del populismo. Estos nuevos líderes suelen posicionarse como disidentes o ajenos al mundo de la política, libres de las limitaciones del consenso político establecido y por lo tanto capaces de tomar las decisiones difíciles que los políticos convencionales eluden. A menudo se presentan como hombres duros – generalmente son hombres - capaces de retrotraer a su país a un pasado glorioso y defender los valores tradicionales, aunque se trate actualmente de valores imaginarios o en disputa.

Estos líderes suelen llegar al poder en forma democrática, ganando elecciones, pero no es infrecuente que tras las elecciones caractericen las expresiones de disenso como antidemocráticas o dañinas. En ese sentido, las elecciones son tratadas como la instancia decisiva, y el disenso subsiguiente ya no es considerado parte de un proceso democrático participativo. El imperio de la ley cede paso al gobierno por decreto; las instituciones judiciales y legislativas son atacadas cuando intentan ejercer controles y ofrecer contrapesos a los desbordes del poder ejecutivo. Una vez elegidos, estos líderes tienden a centralizar y personalizar la toma de decisiones, rodeándose de estrechas camarillas de asesores, a menudo provenientes de la élites empresariales, que se benefician con la flexibilización de las regulaciones comerciales. Es posible que además tomen decisiones afines a los intereses de los bloques de votantes que los eligieron – a menudo compuestos por miembros de grupos étnicos bien establecidos y dominantes en la sociedad, y con frecuencia con un sesgo masculino – pero esos intereses serán perseguidos a expensas de las minorías y los grupos no afines al gobierno, entre ellos buena parte de la sociedad civil. El proyecto necesita chivos expiatorios y objetivos fáciles, y sus líderes recaban apoyo al demonizar a los grupos excluidos como si fueran responsables de los problemas actuales.

Si bien esta tipología se basa en la generalización, muchos de sus elementos se observan en los sucesos de 2016 y 2017 en varios países. En los primeros meses de 2017, gran parte de la atención se concentró en el extraño y a menudo petulante comportamiento de la administración Trump en los Estados Unidos. Pero el de Estados Unidos no debe ser considerado como un caso atípico. Otros ejemplos, expuestos en anteriores Informes sobre la Sociedad Civil así como en el CIVICUS Monitor, pueden observarse en Hungría, India, Israel y Filipinas, tal como se analiza con mayor detalle a continuación. Es importante dejar en claro que la crisis política actual excede a los Estados Unidos y se manifiesta tanto en el norte como en el sur global. El riesgo que presenta la situación de Estados Unidos es que el ascenso al poder del presidente Trump envalentone aún más a potenciales “hombres fuertes” en el resto del mundo.

Durante 2016 presenciamos variadas exhibiciones de poder de estos caudillos. En Turquía, el Presidente Recip Tayyip Erdoğan utilizó el intento de golpe de Estado de julio de 2016 como una oportunidad para imponer nuevas restricciones generalizadas sobre los derechos humanos y la sociedad civil, tal como lo relatan desde la Fundación para el Tercer Sector de Turquía (TUSEV), miembro de AGNA:

> *Luego del intento de golpe de Estado, el 21 de julio de 2016, las autoridades turcas informaron al Secretario General del Consejo Europeo que Turquía notificaría la derogación de la Convención Europea sobre Derechos Humanos conforme al artículo 15 de la Convención. El gobierno extendió el estado de emergencia por otros tres meses, desde el 19 de octubre de 2016. El gobierno llevó cabo arrestos masivos de personal militar, detuvo a varios miles de jueces y periodistas, y miles de funcionarios públicos fueron despedidos por su supuesta conexión con el golpe de Estado. Los decretos emitidos bajo*

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

Fibonacci Blue

el estado de emergencia introdujeron medidas restrictivas que afectaron a la sociedad civil en general.

El estado de emergencia permite al Consejo de Ministros, presidido por el presidente, dictar decretos reglamentarios que tienen fuerza de ley. Además, el Consejo de Ministros puede emitir regulaciones para suspender o restringir el uso de derechos y libertades fundamentales, entre ellos la libertad de asociación. No se establecieron mecanismos de equilibrio de poderes que constituyeran salvaguardas contra medidas desproporcionadas y permitieran preservar la separación de poderes y el imperio de la ley. El estado de emergencia permite al presidente y el gabinete pasar por encima del parlamento al redactar nuevas leyes y restringir o suspender los derechos y libertades básicos.

El estado de emergencia fue extendido nuevamente en enero de 2017. Por entonces se calculaba que 195 empresas de medios de comunicación habían sido cerradas, más de 80 periodistas encarcelados, más de 37.000 personas arrestadas y por lo menos 100.000 despedidas de empleos del sector público. El alto número de despidos de maestros y profesores universitarios y las detenciones de periodistas –improbables líderes de un golpe militar – dejó en claro que la purga constituía un ataque más amplio contra el disenso y la libertad de expresión.

Bajo tales condiciones represivas y en medio de un continuo estado de emergencia, ¿cómo podría llevarse a cabo un referéndum libre y competitivo? Así y todo, en abril de 2017 tuvo lugar una votación con el objetivo de otorgar al presidente nuevos y mayores poderes. El referéndum, en el cual se impuso el presidente por una ajustada mayoría del 51%, fue precedido por una amplia campaña de represión estatal del disenso, que dejó escasas oportunidades para quienes quisieran hacer campaña en contra de los cambios propuestos. No sorprende que los observadores de la Unión Europea (UE) criticaran la votación y afirmaran que no había sido libre ni justa.

Otros líderes dominantes han continuado disfrutando de su poder. En Sudáfrica, el presidente Jacob Zuma continúa desafiando opositores, muchos de ellos dentro de las filas de su propio partido, y afianzando un estilo de gobierno altamente personalizado, por momentos contratando, despidiendo y socavando ministros a su antojo. Se ha aferrado al poder incluso frente a las continuas protestas masivas, cubiertas en la tercera sección de este informe. La administración en cambio ha contraatacado a la sociedad civil acusando a las OSC de colaborar con fuerzas extranjeras para desestabilizar el país. Por su parte, el populismo y el nacionalismo étnico que cultiva el primer ministro indio Narenda Modi, y que se analiza con mayor detalle a continuación, tiene una larga trayectoria, y ha traído consigo severas medidas restrictivas sobre la sociedad civil, inclusive sobre aquella que defiende el medio ambiente de los proyectos de infraestructura de gran escala, promueve los derechos de los grupos excluidos y expone las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. El modelo a seguir para la actual ola de líderes autoritarios altamente personalizados es el presidente de Rusia Vladimir Putin, quien ha seguido reprimiendo a la sociedad civil disidente en cada oportunidad mientras ha creado vínculos internacionales con otros líderes represivos. Dada esta configuración, a la que se suman los sucesos de Brasil que se analizan en la tercera sección de este informe, toda esperanza de que el grupo de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) constituya una fuerza positiva en el sur global es claramente ingenua.

Aunque los que han llegado al poder mediante elecciones han dominado los titulares de la prensa, la nueva política regresiva no necesita obtener el poder para tener un impacto. Puede operar influenciando las agendas de la política convencional en direcciones más populistas y nacionalistas. La extrema derecha y los partidos políticos nacionalistas que alguna vez fueron desestimados como grupos extremistas marginales están dictando la agenda política en varios países europeos, entre ellos Dinamarca, Francia, Alemania e Italia. En Austria, en 2016 hizo falta una segunda elección presidencial para vencer al candidato de extrema derecha; el resultado de la primera votación, anulada por orden judicial, arrojó menos de un punto porcentual de distancia entre los dos candidatos. En los Países Bajos se logró eludir el peor escenario: el candidato de extrema derecha Geert Wilders, condenado por un delito de odio racial en diciembre de 2016, no obtuvo el primer lugar en la elección de marzo de 2017; su partido salió segundo, pero el partido ganador adoptó buena parte de su retórica anti-inmigración. Varios estados europeos han girado hacia la derecha y el aislacionismo en repuesta al crecimiento de grupos de extrema derecha. Son ejemplo de ello las políticas contra los refugiados introducidas recientemente en muchos países, así como el modo en que la política en el Reino Unido se ha reestructurado en torno de interpretaciones de línea dura del resultado del referéndum de junio de 2016 sobre la Unión Europea.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

E. EL IMPACTO SOBRE EL ESPACIO CÍVICO

En parte, el actual giro regresivo ha sido posibilitado por la degradación previa del espacio cívico. En muchos lugares la sociedad civil se ha debilitado y colocado a la defensiva, y por lo tanto tiene menos capacidad para responder a las nuevas emergencias. En los peores casos, el debilitamiento del tejido de la sociedad civil fue el resultado de una labor deliberada para sentar las bases sobre las cuales afianzar el proyecto político reaccionario actual.

El espacio de la sociedad civil se ve amenazado además por la nueva crisis política, ya que los líderes montados sobre la ola populista tienden a resistirse a la rendición de cuentas y al disenso democrático una vez en el poder. La organización de protestas después de las elecciones es con frecuencia tildada de antidemocrática. Quienes revelen relaciones corruptas o conflictos de intereses pueden ser caracterizados como perturbadores o agentes de fuerzas externas. Los riesgos reales que impone el terrorismo transnacional son manipulados con el objeto de imponer restricciones injustificadas. Al momento de

escribir este informe es aún demasiado pronto para constatar de qué modo la sociedad civil de los Estados Unidos es afectada por las políticas del presidente Donald Trump, pero los indicios no son buenos: los países que han seguido una trayectoria similar, como Hungría, India y Rusia, han tratado a la sociedad civil cada vez peor.

Resulta inquietante que los nuevos líderes políticos hayan persuadido a muchos ciudadanos de que las salvaguardas constitucionales e internacionales que respaldan los derechos y permiten el escrutinio y la rendición de cuentas no son necesarias. Muchos ciudadanos se han convencido de que pueden encomendar sus derechos a los líderes. Más aún, los derechos en sí mismos han sido demonizados. Por medio de una repetición incesante de mensajes simplistas, los nuevos líderes políticos han persuadido a grupos dominantes de la población de que los derechos son impedimentos: que son disfrutados por terroristas, solicitantes de asilo político e inmigrantes, y que les facilitan las cosas. Esto está permitiendo a los estados ejecutar una reversión histórica de los compromisos en materia de derechos contraídos después de dos guerras mundiales con el objeto de protegernos de los horrores de la guerra y el totalitarismo.

La popularidad que los ataques contra los derechos tienen entre algunos grupos poblacionales constituye un desafío para la sociedad civil. Como lo sugiere el caso de Filipinas que se expone a continuación, los ataques a los derechos humanos pueden disfrutar de altos niveles de apoyo público. La sociedad civil se encuentra entonces con la dificultad de adoptar una posición impopular. Cuando efectivamente lo hace, la sociedad civil se vuelve blanco fácil de ataques que la caracterizan como desconectada de la opinión pública y promotora de principios foráneos contrarios a los valores nacionales y las decisiones democráticas. En esas circunstancias, la sociedad civil suele enfrentarse al problema de cómo elegir qué batallas pelear y al dilema de si ejercer la autocensura o mantenerse fiel a sus valores.

Un desafío adicional para la sociedad civil, en particular en el sur global, es que cuando estos cambios políticos ocurren en países que han sido considerados por largo tiempo democracias maduras o consolidadas, se normaliza la regresión y se envía un mensaje de aliento a los líderes de estados más autocráticos. El desafío adopta la forma de un interrogante: si las democracias establecidas que son agentes activos del sistema internacional no pueden regirse por los estándares de derechos humanos, ¿por qué habría de hacerlo cualquier otro estado?

Además, el rechazo del internacionalismo y de los valores que lo apuntalan debilita a las instituciones internacionales, tema de la cuarta sección de este informe, y reduce su valor para la sociedad civil en tanto que fuente de normas de derechos humanos y monitoreo de las violaciones de derechos. Por añadidura, cuando los estados del norte global que son donantes prominentes dan un giro fuerte hacia la derecha, sus políticas de donación pueden cambiar, alejándose del apoyo a los derechos humanos y la sociedad civil y pasando a centrarse en los propios intereses, y en particular en los económicos y de seguridad. Más aún, el poder blando que pueden tener los donantes para alentar a los estados a respetar a la sociedad civil, la democracia y los derechos humanos se desgasta cuando los propios países donantes no respetan internamente esas normas.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

DERECHOS HUMANOS Y OPINIÓN PÚBLICA EN FILIPINAS

En 2016, Filipinas ofreció un ejemplo de cómo los ciudadanos pueden apoyar a un líder controvertido y que se expresa sin rodeos, y cómo los derechos humanos, y entre ellos los derechos de la sociedad civil, resultan perjudicados por esos movimientos.

Rodrigo Duterte fue elegido presidente de Filipinas en mayo de 2016, con el 39% el voto popular. Al asumir la presidencia, y con el pretexto de combatir la delincuencia vinculada con la droga, Duterte, ex intendente de la ciudad de Davao en la región de Mindanao, escaló inmediatamente su campaña de asesinatos extrajudiciales, llevándola del nivel municipal a la escena nacional. Según estimaciones de grupos de la sociedad civil, desde 1998 1.400 personas habían sido asesinadas ilegalmente por escuadrones de la muerte en Davao. Cuando Duterte asumió la presidencia, se permitió a las fuerzas policiales y las bandas parapoliciales operar sin control, y se rumoreó que operaban escuadrones de la muerte de la policía secreta. Para enero de 2017, cuando el presidente Duterte ordenó a la policía, pero no a otras fuerzas, que suspendiera las operaciones antidrogas, se calcula que más de 7.000 personas habían sido asesinadas en la ofensiva.

Estos asesinatos, así como la impunidad subsiguiente, no fueron meramente tolerados por el presidente Duterte, sino que fueron activamente aprobados y alentados por él. Por ejemplo, en agosto de 2016 el presidente Duterte publicó una lista de funcionarios y políticos supuestamente implicados en el tráfico de drogas, muchos de los cuales se entregaron a la policía para no arriesgarse a ser asesinados por parapoliciales; se sospecha que muchos de los de la lista eran sus enemigos políticos. En el transcurso de 2016 salieron a la luz nuevas pruebas del rol activo del presidente Duterte en el encargo y la financiación de los asesinatos en Davao. Hacia diciembre de 2016 el presidente Duterte estaba envalentonado al punto de jactarse de su pasado y de su papel directo en los asesinatos y de amenazar con asesinar a los funcionarios gubernamentales corruptos. También se comparó con Hitler, amenazó con asesinar a millones de usuarios de drogas si fuera necesario, y sugirió que podría suspender el hábeas corpus, una protección esencial contra las detenciones ilegales. Por entonces se denunció que circulaban 'listas de objetivos de asesinatos'.

Los ataques fueron un instrumento burdo. Incluso en el marco de la lógica fallida de que la mejor manera de erradicar los delitos relacionados con la droga es asesinar a los narcotraficantes, la cultura de la impunidad y la retórica política imperantes resultaron en asesinatos de muchas personas que no habían cometido ningún delito; de hecho, se volvió posible cometer asesinatos impunemente siempre que la víctima fuera caracterizada como un criminal involucrado con las drogas. Se sugirió con insistencia que la policía simplemente plantaba pruebas y falsificaba informes para justificar los asesinatos. En última instancia, la violencia engendra violencia: cuando las personas se dan cuenta de que la delincuencia violenta puede quedar impune, son alentados a cometer más actos de violencia, y el imperio de la ley se erosiona. Esta impunidad pone en peligro sobre todo a los excluidos y menos poderosos, como lo señala Roselle Rasay, de Caucus of Development NGO Networks (CODE-NGO)[4]:

DESDE 1998 1.400 PERSONAS HABÍAN SIDO ASESINADAS ILEGALMENTE POR ESCUADRONES DE LA MUERTE EN DAVAO

[4] Extracto editado de una entrevista realizada en diciembre de 2016. La entrevista completa está disponible en http://bit.ly/2hkukFT.

A nivel comunitario, las amenazas generan temor porque la policía va de casa en casa pidiendo a las personas que anoten sus nombres y declaren si usan drogas. Algunas personas no saben qué significan esos formularios. Tan solo presentan sus datos en función de la situación que hay en la comunidad. Esto crea problemas dentro de algunas comunidades porque los vecinos se señalan entre sí. Algunas personas de la comunidad pueden también escribir los nombres de las personas que no les gustan. Algunos de los que usan drogas señalarán a otros.

La mayoría de los muertos pertenecen a las comunidades más pobres e incluso pueden no ser usuarios de drogas. Hay muy pocos personajes importantes atrapados con estos métodos, salvo por un alcalde que fue asesinado después de entregarse voluntariamente porque las autoridades lo estaban buscando. Fue asesinado en la cárcel misma. La impresión es que sabía quién más tenía conocimiento en cuestiones de drogas.

Esta reciente ola de asesinatos debe ubicarse dentro de un patrón más amplio de violación de los derechos humanos. Filipinas ha sido durante mucho tiempo un país donde periodistas de investigación, defensores de derechos humanos y activistas de la sociedad dedicados a denunciar la corrupción y defender los derechos ambientales y a la tierra se enfrentan a altos niveles de riesgo e impunidad. Front Line Defenders ha calificado sostenidamente a Filipinas como uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. Aquellos que se sospecha tienen participación directa en el comercio de drogas no son los únicos blancos. En junio de 2016, el presidente Duterte sugirió que podría haber justificación para los asesinatos de periodistas, un problema constante en el país. En noviembre de 2016 el presidente también culpó a los defensores de derechos humanos por el problema de drogas en el país, y amenazó con asesinarlos también a ellos. Las lección aprendida en 2016 en Filipinas es que si no se opone resistencia al lenguaje y las acciones demagógicas, sus autores se vuelven más seguros y menos preocupados por las repercusiones, y sus palabras y acciones se amplifican.

Roselle Rasay deja en claro que la amenaza de ataques se ha extendido a quienes critican los asesinatos e intentan defender los derechos humanos:

El presidente dijo que matará a los defensores de derechos humanos si la campaña contra las drogas se detiene por su culpa y el problema de las drogas ilegales empeora. La Comisión de Derechos Humanos también está siendo atacada por el presidente. Hay una obvia inacción de parte de las autoridades policiales en los casos de denuncias de asesinatos extrajudiciales, y todos ellos están agrupados como "muertes bajo investigación".

El propio presidente fomenta a través de sus declaraciones las acciones parapoliciales, y alienta a los ciudadanos a tomar las armas para asesinar a vendedores o consumidores de drogas. El presidente ha tomado partido por la policía que está siendo investigada por abuso en la campaña antidrogas, difamando y menoscabando a la Comisión de Derechos Humanos y a los países e instituciones que piden que las flagrantes violaciones de derechos humanos en la campaña antidrogas sean investigadas. También ataca personalmente y alienta, si es que no organiza, el ataque total por parte de su Secretario de Justicia y sus aliados en el Congreso contra la senadora Leila de Lima, quien lideró las investigaciones del Senado sobre la guerra contra las drogas, todo ello aparentemente para silenciar y debilitar a la oposición.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

En febrero de 2017 la senadora de Lima, una crítica abierta de las acciones del gobierno, fue detenida y acusada de tráfico de drogas, cargo que ella alega que es falso.

El desafío para la sociedad civil era que muchos ciudadanos parecían apoyar las acciones del presidente: una encuesta de opinión realizada en julio de 2016 indicó que el 91% de los filipinos confiaba en el presidente Duterte, en comparación con el 35% que confiaba en el Juez Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si bien esto puede haber reflejado un efecto de luna de miel, para octubre de 2016, cuando los asesinatos ya estaban sucediendo y eran altamente visibles, otra encuesta le dio al presidente Duterte un índice de aprobación de 76%, en tanto que una encuesta posterior llevó la cifra a 86%. Podría argumentarse que los más amenazados por la ola de asesinatos e impunidad eran los más excluidos de la sociedad, es decir gente sin voz, y que por lo tanto es probable que estuvieran mal representados en las encuestas. Pero de todas maneras, el riesgo era que la sociedad civil, en su intento de defender los derechos humanos, defender el espacio cívico y cuestionar la impunidad, se hallara en contradicción con la opinión pública.

El desafío para la sociedad civil era encontrar una manera de reconocer la legitimidad de las preocupaciones públicas sobre el delito y comprender que los niveles de apoyo público del presidente Duterte podían surgir en parte del enojo por el hecho de que los presidentes anteriores hubieran fracasado en combatir el delito o fueran vistos como corruptos o cómplices con el tráfico de drogas, y al mismo tiempo afirmar que los asesinatos no son la manera de abordar estos agravios. Otro desafío para la sociedad civil, a la hora de enfrentarse a medidas reaccionarias con apoyo popular, es la amenaza de represalias. De hecho la sociedad civil filipina ha sufrido el ataque de *trolls* en Internet y amenazas e intimidación por parte de personajes de la política y de las fuerzas de seguridad. Roselle Rasay explica que la campaña de asesinatos dividió a la sociedad civil:

> *Entre las OSC, algunas están muy en contra de ello y han redoblado su trabajo y son muy abiertas acerca de sus sentimientos sobre la campaña. Otras no expresan abiertamente su desacuerdo con la campaña porque temen poner en riesgo otras acciones de incidencia en las que están trabajando con el gobierno, como las conversaciones de paz y la reforma agraria, entre otras.*

Desde la sociedad civil, sin embargo, algunos respondieron. La Iglesia Católica, una fuerza social importante en Filipinas, expresó su alarma ante los asesinatos y condenó como inmoral una oferta hecha por el alcalde de una ciudad de pagar a la policía recompensas en efectivo por asesinar a los sospechosos de delitos relacionados con drogas. Activistas de la sociedad civil trabajaron para crear nuevas plataformas para defender el imperio de la ley, entre ellas la Fuerza de Tareas para Detenidos en Filipinas, una OSC que documenta violaciones, promueve investigaciones y apoya a las víctimas y sus familias, y el Movimiento en Defensa de los Derechos Humanos y la Dignidad, formado por alrededor de 30 OSC para proporcionar servicios legales a las familias de los asesinados. En noviembre de 2016, una cantidad de activistas lanzó la Red contra los Asesinatos en Filipinas para plantear una postura no partidista de la sociedad civil contra los asesinatos e instar al mantenimiento del imperio de la ley. El aniversario de la Revolución del Poder Popular en febrero de 2017 también fue ocasión de marchas de protesta contra el presidente Duterte, así como de otras en su apoyo. Roselle Rasay destaca algunas formas adicionales que adoptó la respuesta de la sociedad civil, entre ellas la concientización sobre derechos y la promoción de estrategias de protección, pero también alerta sobre la reacción negativa que ellas podrían generar:

Con la sociedad civil en gran medida dividida en sus opiniones o posturas, aún existen algunos sectores que han juntado coraje para aparecer en público y denunciar los excesos de la actual administración. Esto se está haciendo de varias maneras, como mediante la movilización y otras acciones contra los asesinatos extrajudiciales. Varios grupos de derechos humanos, y grupos por la paz, entre ellos mi organización, CODE-NGO, han condenado la campaña, haciendo declaraciones en medios tradicionales y redes sociales para condenar los asesinatos. En las redes sociales, sin embargo, estas declaraciones normalmente reciben respuestas desagradables por parte de los partidarios del presidente Duterte, muchos de los cuales parecen ser trolls a sueldo. Los abogados que toman casos también están siendo atacados de la misma manera.

La asamblea general de CODE-NGO aprobó recientemente una resolución pidiendo a los poderes del gobierno que defiendan los derechos humanos en el marco de la campaña contra las drogas. También hay conversaciones en marcha entre las OSC para dar orientación a las comunidades con las que trabajan sobre cómo protegerse y afirmar sus derechos contra los registros domiciliarios o arrestos sin orden judicial por parte de la policía.

En el pasado hemos tenido éxito en mejorar las políticas relacionadas con la regulación de las OSC y en mejorar la imagen pública y el apoyo público a las OSC. Sin embrago, es demasiado pronto para saber si CODE-ONG y otras OSC podrán defender y promover con éxito el espacio cívico dados los pronunciamientos y acciones del presidente.

En última instancia, el presidente Duterte será juzgado por la medida en que satisfaga las necesidades más urgentes de los filipinos, como el control de la inflación, la creación de empleos y la lucha contra la pobreza. Debería estar claro que el clima actual de asesinatos e impunidad no va a aportar nada a la solución de los problemas económicos y sociales subyacentes en Filipinas, y que solo bajo condiciones en que los ciudadanos se sientan protegidos de la violencia de todos los sectores y sean libres de expresar sus opiniones sin temor llegarán soluciones verdaderas. Se ha demostrado que la retórica según la cual las acciones pasadas del presidente Duterte en Davao ayudaron a reducir el delito y la violencia es infundada, y debe ser combatida y criticada.

En estos contextos la sociedad civil necesita apoyo internacional, pero obtenerlo no es sencillo en un contexto en que se impone el nacionalismo y las instituciones internacionales son cuestionadas. En el caso de Filipinas las instituciones internacionales intentaron dar una respuesta: el Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) sugirió que se podría abrir una investigación preliminar, y la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, intentó visitar el país, pero fue obligada a retirarse después de que el Estado intentara imponer una cantidad de condiciones sin precedentes para su visita. Estas incluían que la relatora hiciera un juramento y se sometiera a un interrogatorio del presidente Duterte, disposiciones que habrían socavado profundamente su independencia. En otra muestra de preocupación internacional, en diciembre de 2016 un aliado tradicional de Filipinas, el gobierno de los Estados Unidos, aplazó la renovación de un paquete de ayuda, en tanto que el mes anterior había suspendido una venta planificada de rifles de asalto para la policía.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

Fibonacci Blue

En respuesta, el presidente Duterte atacó a las instituciones de la ONU y a la CPI y amenazó con retirarse de ellas. También atacó a la UE, se distanció repetidamente de los Estados Unidos y cultivó públicamente conexiones con China y Rusia. El cálculo internacional puede haber cambiado con el ascenso al poder del presidente Trump, quien según el presidente Duterte alabó su política sobre drogas en una cálida llamada telefónica, lo cual muestra de qué modo los nuevos líderes políticos se apoyan recíprocamente a nivel internacional.

Lo que esto sugiere es que toda interacción internacional con Filipinas que no cuestione el enfoque del presidente Duterte será bienvenida, mientras que las que lo critiquen no lo serán. El discurso de los derechos humanos será rechazado, pero no como parte de un rechazo aislacionista de toda cooperación internacional; por el contrario, los lazos internacionales serán bien recibidos cuando permitan la propagación de normas regresivas antiliberales.

F. COMPRENDER EL ENOJO

Si la sociedad civil ha de resistir los impactos de estos cambios y generar una respuesta, necesitamos comprender, reconocer y trabajar con y no contra el enojo público que los líderes reaccionarios están aprovechando, alimentando y dirigiendo. La revuelta populista parece componerse de tres fases. Primero está el sentimiento de agravio. Luego este es procesado de modo de constituir una narrativa y crear una base de representados. Esto conduce a la formación de un movimiento político enmarcado en torno de un conjunto de soluciones simplistas. En ausencia de la sensación de agravio, nada de lo demás tiene lugar.

Aunque el mundo de 2017 pueda parecer marcadamente distinto del de 2011, lo que ambos tienen en común son los altos niveles de enojo ciudadano. La rabia que alimentó ciertos procesos políticos recientes tal vez no sea tan distinta de la que desencadenó las protestas masivas de 2011. En muchas partes del mundo la gente se siente abandonada por las mareas de la globalización económica. Estudios recientes muestran que la globalización económica ha beneficiado desproporcionadamente a los que ya eran ricos, mientras que los más pobres se han beneficiado poco o menos. Además, los ingresos en muchas economías avanzadas se han estancado o están en retroceso, de modo tal que las nuevas generaciones enfrentan hoy la perspectiva antes inimaginable de ser más pobres que la generación anterior. Mucha gente siente que está luchando por llegar a fin de mes y que trabaja más pero se siente más pobre. Su empleo es menos seguro de lo que solía ser y es vulnerable a la externalización, al tiempo que la red de seguridad derivada de los beneficios sociales provistos por el Estado se está reduciendo. Estas personas han sido designadas como "los precarizados".

LA RABIA QUE ALIMENTÓ CIERTOS PROCESOS POLÍTICOS RECIENTES TAL VEZ NO SEA TAN DISTINTA DE LA QUE DESENCADENÓ LAS PROTESTAS MASIVAS DE 2011

Al mismo tiempo, en países que sufrieron las peores sacudidas de las crisis económicas de principios del siglo XXI, los ciudadanos vieron a sus gobiernos reaccionar rescatando a las instituciones financieras y protegiendo a las grandes empresas, incluso a expensas del gasto público. Las filtraciones de los Panama Papers expusieron la complejidad de las conexiones entre los políticos y las instituciones financieras que les ayudaban a administrar sus riquezas: se reveló que 140 políticos y funcionarios de más de 50 países mantenían vínculos con esquemas de administración financiera offshore conectados con la firma Mossack Fonseca. Las filtraciones destacaron la riqueza de los líderes políticos y su distancia respecto de los votantes; arrojaron luz sobre la naturaleza interconectada de las élites y suscitaron la cuestión de si acaso los líderes políticos toman decisiones en defensa de su riqueza y del secreto que la protege.

Algunas personas sienten que los gobiernos están privilegiando a grupos particulares a expensas de la mayoría de la población. Pueden sentirse desconcertadas y dejadas de lado por el ritmo de los cambios contemporáneos en las prácticas laborales y en los usos de la tecnología. Los hombres en particular pueden sentir que sus roles establecidos, en el lugar de trabajo y en la sociedad, están siendo socavados por los cambios laborales y los avances de los derechos de las mujeres. La gente puede ver a sus vecindarios reconfigurarse por acción de las empresas transnacionales y la inmigración. Puede que tengan temor al delito.

Esto alimenta y refuerza la percepción de que los líderes políticos convencionales están aislados, son corruptos y gobiernan en función de sus propios intereses y de quienes integran su círculo, más que en el interés de grupos de ciudadanos más amplios. Los ciudadanos pueden considerar que la política es muy limitada, con partidos políticos establecidos y líderes convencionales que suenan y se ven igual y ofrecen políticas similares. La gente trabajadora puede sentir que los partidos de centroizquierda que

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

tradicionalmente han defendido sus intereses ya no hablan por ellos. Pueden considerar que los procesos políticos establecidos no les dan suficientes oportunidades para expresar el enojo que sienten y para ejercer influencia sobre la sociedad y la política. En su peor expresión, este enojo se manifiesta en un rechazo de la propia noción de democracia; hay cierta evidencia, al menos para las democracias establecidas, de que el respeto por las instituciones democráticas está cayendo y que el apoyo a líderes autoritarios va en aumento.

Lo que parece claro es que hay una crisis de confianza: la edición 2017 del Barómetro de Confianza de Edelman, que mide los niveles de confianza de los ciudadanos en el gobierno, las empresas, las OSC y los medios, registra una caída sin precedentes en las cuatro esferas. Las OSC siguen siendo el tipo de institución que suscita mayor confianza, pero la confianza en ellas ha disminuido, como lo ha hecho la confianza en las demás instituciones. Según el Barómetro, la mayor parte de la población en la mayoría de los países analizados no cree que el sistema esté funcionando para ellos. Existen brechas enormes y crecientes entre la confianza en el sistema que sienten las personas acaudaladas, bien educadas y bien informadas y la confianza que siente el resto de la población. La mayor de dichas brechas se observa en los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, todos países que han visto resurgir la furia populista. Se trata también de tres países donde, según una encuesta reciente, la mayoría de los ciudadanos siente que el país va por el camino equivocado y donde grandes preocupaciones – tales como el terrorismo, la inmigración y el desempleo, respectivamente - han creado un terreno fértil para el populismo.

Los ciudadanos que se sienten de ese modo aprovecharán toda oportunidad para comunicar su enojo. Protestarán en las calles y a través de las redes sociales. Votarán a líderes populistas que prometan soluciones simples. Rechazarán a los candidatos de los principales partidos políticos, tal como sucedió en la elección presidencial francesa de 2017. Se apropiarán de los referéndums, cuando les sean ofrecidos, y harán que signifiquen algo diferente, como se vio en varias oportunidades durante 2016. En efecto, el referéndum de Colombia sobre el proceso de paz fue recargado de un conjunto de preocupaciones socialmente conservadoras acerca del ritmo del cambio político y fue rechazado por un pequeño margen; el referéndum de Italia sobre el cambio constitucional proporcionó la oportunidad para un voto de protesta organizado por una improbable coalición de partidos autodefinidos como anti-establishment; y el referéndum del Reino Unido sobre su pertenencia a la Unión Europea fue una oportunidad para expresar descontento con la inmigración, el desempleo y la lejanía de la élite política en muchas partes del país. En los tres países, un bloque de ciudadanos enfurecidos se apropió del referéndum como vehículo para articular su rabia y experimentó la satisfacción de llevar al establishment a la derrota.

LA SOCIEDAD CIVIL Y EL REFERÉNDUM DE PAZ COLOMBIANO

El acuerdo de paz negociado para poner fin a décadas de conflicto armado entre el Estado y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue sometido a un referéndum en octubre de 2016. El resultado fue un ajustado triunfo del NO al acuerdo por 50,2% contra 49,8%. Ello que causó gran conmoción en toda la clase dirigente política de Colombia, y también entre la sociedad civil, que había hecho campaña a favor del acuerdo.

La campaña se caracterizó por la polarización y la difusión en las redes sociales de mitos populistas para generar temor. Tal como lo señalan desde la Confederación

Colombiana de ONG (CCONG), miembro de AGNA, la sociedad civil que hizo campaña por el SÍ tuvo que enfrentarse a una andanada de desinformación e incomprensión política, además de ciertos riesgos personales:

> *Las OSC emprendieron acciones pedagógicas para socializar entre la ciudadanía los alcances reales del acuerdo de modo de deslegitimar los argumentos mentirosos que crearon miedo en ciertos sectores sociales; acciones de movilización social, dirigidas a presionar a los actores políticos para seguir avanzando en la revisión de los acuerdos y no abandonar el camino de la paz; y acciones pedagógicas para fortalecer la cultura política y democrática de amplios sectores del país, y especialmente entre los jóvenes. Lo hizo sobre la base del entendimiento de que, aunque la tecnología es una herramienta, la democracia se construye en las urnas, mediante la incidencia política y a través de procesos territoriales de diálogo político y control social.*
>
> *Siendo este el proceso más importante en la historia del país, ciertos actores legales e ilegales adelantaron estrategias comunicativas para desacreditar a las OSC, caracterizando sus acciones en defensa derechos como actos de desestabilización de la democracia. Muchas OSC que se movilizaron por el SI en el referendo fueron víctimas de ataques a sus sedes y de persecución de sus líderes y lideresas.*
>
> *El triunfo del NO en el referendo reflejó el alto índice de polarización política y social del país e implicó grandes riesgos para sectores de la población y la sociedad civil que movilizan acciones ciudadanas en defensa de derechos, participan de manera crítica, y ejercen un rol político de control social en los territorios en conflicto.*

Como relata Carlos A. Guevara de Somos Defensores, la sociedad civil durante largo tiempo ha desempeñado un importante papel, no reconocido, en la construcción de la paz en Colombia[5]:

> *A la sociedad civil no se le da mucha prensa, pero lo cierto es que es la pieza clave de la construcción de la paz en Colombia. Durante muchos años los defensores de derechos humanos han luchado por la salida negociada del conflicto, y ahora son los principales activistas por la paz. Desde que comenzaron las negociaciones, toda la sociedad civil – a nivel nacional, regional, local – ha formulado propuestas para llevar la paz a los territorios, y las ha hecho llegar a la mesa de negociaciones. Por ejemplo, el tema de cómo la violencia ha afectado en forma diferencial a las mujeres entró en las negociaciones gracias al trabajo del movimiento de mujeres de Colombia.*

La sociedad civil también ha sido blanco de los ataques de quienes se oponen a la paz, y la situación para la sociedad civil sigue siendo difícil, como bien lo expresa CCONG:

> Paradójicamente, mientras se renegociaba el acuerdo de paz el índice de persecución y asesinato de líderes sociales en el territorio aumentó de manera exponencial.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

En efecto, la revisión de medios de comunicación y estadísticas oficiales y de organizaciones de derechos humanos revela que cerca de 70 líderes sociales fueron asesinados y que también aumentó el número de amenazas y atentados.

Desde la Corporación Defensora de Agua, Territorio y Ecosistemas (CORDATEC), una organización ambientalista de San Martín en la región de César, también Carlos Andrés Santiago relata que la paz ha traído consigo nuevas amenazas a la sociedad civil, incluso a la que defiende el medioambiente[6]:

Ha quedado un espacio que está siendo ocupado por nuevos grupos armados o bandas criminales. Estamos presenciando el tránsito de un gran conflicto entre dos actores armados, a un conjunto de conflictos diversos en torno a temas sociales, muchos de ellos ligados a causas ambientales. Por ejemplo, conflictos por el uso de la tierra protagonizados por víctimas que exigen la restitución de sus predios; y luchas en defensa del agua, sobre todo en comunidades que, como la nuestra, se oponen a proyectos extractivos.
El hecho de que se apagara el conflicto con las FARC, con todas las víctimas que traía aparejado, hizo que recrudecieran y al mismo tiempo se volvieran mucho más visibles los asesinatos de activistas sociales y ambientales, defensores de derechos humanos que están en los territorios y en las comunidades.

Gina Romero, directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad) destaca no solamente los desafíos que enfrenta la sociedad civil, sino también las oportunidades que la paz podría ofrecer para articular el disenso de un modo diferente[7]:

> *En los últimos dos años de negociaciones la cantidad de muertos y desaparecidos provocados por las FARC ha sido muy baja. Ha habido en cambio otros actores que han sido fuente de amenazas para los defensores de derechos humanos. Entonces, el acuerdo de paz efectivamente garantiza mejores condiciones en lo que se refiere a la acción de las partes que se han acogido a sus términos, pero al mismo tiempo puede resultar en un aumento de la violencia –como sucedió en los primeros años de las negociaciones- procedente de otros actores que quieren posicionarse en reemplazo de los grupos desmovilizados.*

> *En el imaginario colombiano, la protesta ha estado muy asociada a los movimientos de guerrilla, e históricamente ha sido bastante mal vista. En ese sentido es posible que este proceso acabe liberando el espacio simbólico que durante mucho tiempo ocuparon las FARC en calidad de representantes de la lucha por la equidad social (cualidad que perdieron por el camino) y que el ejercicio del derecho de protesta resulte reivindicado.*

[5] Extracto editado de una entrevista realizada en abril de 2016. La entrevista completa está disponible en http://bit.ly/2mBJupI.

[6] Extracto editado de una entrevista realizada en marzo de 2017. La entrevista completa está disponible en http://bit.ly/2nlJU4o.

El acuerdo de paz fue eventualmente renegociado y aprobado por el Congreso, y ya no a través de un referéndum, en noviembre de 2016. Pero, tal como lo sugiere Carlos A. Guevara, el acuerdo debería ser solo el comienzo, y se necesita un compromiso a largo plazo:

> *La sociedad civil reclama desde hace años que la comunidad internacional no se vaya de Colombia. Porque el gobierno ha dado a entender que con la firma de los acuerdos se acaban el conflicto y las vulneraciones de los derechos humanos. Sin embargo, los países que han salido de conflictos como este generalmente enfrentaron en los primeros cinco o diez años de post-conflicto escenarios de violencia incluso más álgidos que en los últimos años de la guerra, porque es cuando la sociedad acomoda a sus nuevos integrantes.*

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

Las agencias de verificación internacional no se pueden ir de Colombia ni bien se firmen los acuerdos; necesitamos por lo menos diez años más de acompañamiento. El conflicto todavía no se ha resuelto de manera profunda y definitiva: recién estamos hablando de la desmovilización de las guerrillas, no la construcción de la paz. En primer lugar, es necesario volcar recursos para que la construcción de la paz sea un asunto ciudadano. Segundo, necesitamos apoyo económico para explorar nuevas opciones para proteger a los defensores. Tercero, necesitamos ayuda para hacer frente a las nuevas violencias que se están gestando en los territorios, en particular las generadas en torno de la industrias extractivas. Y ahí la comunidad internacional tiene una enorme responsabilidad, porque las grandes empresas mineras que están llegando son canadienses, británicas, españolas, brasileñas, estadounidenses, japonesas… todos países que colaboran en derechos humanos con nuestro gobierno y nuestras organizaciones de la sociedad civil.

[7] Extracto editado de una entrevista realizada en septiembre de 2016. La entrevista completa está disponible en http://bit.ly/2muVUQU.

La desigualdad que más descarnadamente marca al mundo de hoy es la que existe entre los increíblemente ricos y todos los demás. Tal como lo reveló Oxfam recientemente, los ocho hombres más ricos del planeta poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial. Sin embargo, en su mayoría el enojo de la gente actualmente no se concentra en los muy ricos; recae, en cambio, sobre la clase profesional que generalmente controla el acceso al poder. Cuando las campañas políticas hablan de que la gente "retome el control", esta es la clase a la que se quiere arrebatar el control: la de los políticos profesionales, los funcionarios públicos de carrera, los directivos de los medios públicos de comunicación, los intelectuales públicos, los expertos. Durante la campaña para el referéndum de 2016 en el Reino Unido, un prominente político que estaba a favor de la salida de la Unión Europea anunció que "la gente de este país está harta de los expertos".

En un truco perverso, el enojo alimentado por la globalización económica ha sido capturado por los ganadores de la globalización económica, es decir, por miembros de élites acaudaladas como los que integran el gabinete de multimillonarios del presidente Trump que se presentan como jugadores audaces ajenos a la política. Debido a que los partidos políticos establecidos son rechazados como cómplices de un superficial consenso neoliberal, difíciles de diferenciar e incapaces de ofrecer soluciones radicales para los problemas actuales, los líderes populistas han logrado capturar la imaginación, dar forma a la narrativa de la desafección y obtener apoyo. El enojo que podría dirigirse contra los muy ricos y contra las estructuras de la globalización económica está en cambio concentrándose sobre una clase profesional a la que se asocia fuertemente con la globalización económica.

La nueva raza de líderes políticos fomenta la hostilidad hacia las clases dirigentes, pero también está instando a la gente a golpear hacia abajo, culpando por la inseguridad que sienten a quienes tienen aún menos que ellos: así, en muchos contextos el enojo apunta a los migrantes y refugiados, a las personas que reciben beneficios sociales y a los que obtienen ayuda del extranjero. El

ataque se concentra en quienes son visiblemente distintos de los grupos mayoritarios, y tiene connotaciones de género. El cultivo de la división no es un subproducto del nuevo proyecto político; forma parte de su esencia, ya que los dirigentes populistas buscan segmentar a la población y forjar una alianza de descontentos, definidos tanto por lo que rechazan como por lo que apoyan.

La sociedad civil se encuentra en los márgenes de la discusión, y es atacada como parte de la clase profesional cuando reacciona en defensa de derechos y de los que menos tienen. Esto sucede pese a que muchos en la sociedad civil han estado durante años a la vanguardia de la crítica del modo en que se ha puesto en práctica la globalización económica y de la búsqueda de una distribución más equitativa del poder económico y político. Pero quienes trabajamos en la sociedad civil nos encontramos hoy en una situación comprometida, alcanzados por la reacción y con nuestros argumentos eclipsados por llamamientos simplistas y reaccionarios.

Para entender de qué modo este enojo está siendo moldeado y dirigido, debemos observar las formas en que los nuevos líderes políticos se están comunicando y llegando al público, particularmente mediante el uso de los nuevos medios de comunicación.

G. MOVER LA VENTANA: LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL NUEVO PROYECTO POLÍTICO

Aun cuando hagan apelaciones nostálgicas a la restauración de los valores tradicionales y las glorias pasadas, los líderes populistas de la nueva ola comprenden y aprovechan hábilmente el poder de los nuevos medios de comunicación, y en particular de las redes sociales. Si algo se demostró el año pasado es que el discurso político importa. El manejo de la narrativa y la determinación de los términos y el terreno del debate pueden ser precursores del poder político. De ahí que el actual proyecto regresivo se involucre de modo explícito en la batalla de ideas. La intención es cambiar lo que a menudo se describe como la ventana Overton - el rango de ideas políticas sobre las que los políticos pueden apoyarse y ganar una elección. Este cambio no se puede efectuar sin captar y dar forma a la opinión pública; el público necesita considerar aceptable aquello que alguna vez habría considerado impronunciable. Lo que previamente era escandaloso se normaliza y las opiniones que antes era considerado de mal gusto compartir se cuelan en el discurso político dominante e influyen sobre él. Los nuevos medios de comunicación son el campo de batalla clave.

Muchos de nosotros en la sociedad civil hemos depositado grandes esperanzas en la expansión de los nuevos medios. El potencial parecía obvio: la gente podría articular sus opiniones directamente y utilizar nuevas herramientas para interpelar a quienes tienen poder, exponer problemas de gobernanza, promover causas y autoorganizarse. Los ciudadanos tendrían nuevas oportunidades de educarse, lo que les permitiría superar los prejuicios, y en particular los sesgos de los medios de comunicación en aquellos contextos donde el Estado mantiene un estricto control de la radiodifusión pública. Y en verdad hay muchos ejemplos en los cuales los ciudadanos han utilizado estas nuevas herramientas para lograr un efecto positivo: en Brasil, una aplicación móvil permitió a los ciudadanos hacer un seguimiento del progreso de los políticos en el cumplimiento de sus promesas electorales; en Indonesia, fue posible mejorar la toma de decisiones del gobierno local con datos

generados por los ciudadanos; en las protestas que tuvieron lugar en 2017 en Rumania, tratadas en la tercera sección de este informe, los manifestantes utilizaron sus teléfonos para formar una gigantesca bandera rumana como símbolo de protesta viral. Además, tal como se ilustra en la segunda sección de este informe, centrada en la libertad de expresión, los estados reconocen el poder implícito de las nuevas tecnologías cuando acosan y detienen a activistas virtuales, bloquean sitios web y cierran Internet o sus principales aplicaciones en momentos de conflicto. Esto sucedió en 2016 en Camerún, Kazajistán y Turquía, para dar solo tres ejemplos.

Pero la fe de la sociedad civil en Internet y las redes sociales ha sufrido un serio revés en los últimos años, en los que los nuevos medios se han convertido en sede de interminables intervenciones de *trolls* y fuente de propagación del racismo, el sexismo y la xenofobia. Cualquier mujer que se exprese abiertamente en las redes sociales corre el riesgo de ser acosada simplemente por ser mujer; las mujeres activas políticamente sufren niveles extraordinarios de abuso. Incluso la esperanza que muchos en la sociedad civil depositaron alguna vez en WikiLeaks fue cuestionada por la visible cercanía de la red con el Estado ruso y la campaña electoral de Trump. Las nuevas fuerzas políticas reaccionarias han demostrado ser hábiles en el uso de los nuevos medios para difundir el discurso del odio, atacar los derechos humanos y preparar el terreno para su discurso político a través de la difusión de medias verdades y mentiras.

En lugar de considerarlas fuerzas innatas del bien o del mal, desde la sociedad civil necesitamos ver a Internet y las redes sociales como espacios que podemos utilizar y capturar para nuestra causa. Esto no quiere decir que las nuevas empresas de medios estén libres de política; existen numerosos ejemplos de compañías de tecnología que cooperan con los estados para restringir o permitir la vigilancia de contenidos, como en los casos de China, Pakistán y los Estados Unidos, mientras que hacen poco por impedir el flujo del discurso del odio o incluso lo facilitan activamente.

Además, ha aumentado la conciencia de la capacidad que tienen las redes sociales para atraparnos dentro de cajas de resonancia. Nuestras redes de amistad refuerzan nuestros prejuicios, porque es más probable que nos conectemos con personas a las que les gustan las mismas cosas que nosotros o que comparten nuestras opiniones. Mientras tanto, poderosos algoritmos diseñados para vender publicidad personalizada nos rastrean, identifican qué nos gusta e intentan darnos más de lo mismo. La mayoría de las personas se adhieren a un puñado de plataformas de redes sociales y les resulta conveniente obtener sus noticias de ellas. En los Estados Unidos, un estudio realizado en 2016 halló que el 62% de los adultos obtiene sus noticias de los sitios de las redes sociales, y el 64% de ellos privilegia una sola plataforma, generalmente Facebook, como fuente de noticias. El peligro es que solo estamos viendo las cosas que concuerdan con nuestra visión preexistente del mundo y que la confirman; rara vez somos confrontados por un contraargumento que debamos tomar en serio y al que debamos responder. Bloquear las opiniones contrarias a las nuestras o atacar a los que las proponen es más fácil que pensar en ellas; cuando las bloqueamos, es probable que nuestro comportamiento sea recompensado más que criticado por nuestros pares en las redes sociales, y que también ellos endurezcan sus opiniones desde que han obtenido validación para sus propios puntos de vista.

El efecto de cámara de resonancia no privilegia ninguna postura. Sin embargo, el proyecto político regresivo ha tenido un éxito notable a la hora de reclamar espacio para sus ideas en las redes sociales para sus ideas. El sitio web de *Breitbart News*, el medio que se autoproclamó abanderado de la "derecha alternativa", es uno de los

más visitados en los Estados Unidos; por momentos llega a más personas que los sitios de noticias de mayor trayectoria, y continúa expandiéndose hacia Europa. Fue central para la campaña que impulsó al presidente Trump al poder, y su Director Ejecutivo, Steve Bannon pasó directamente a tener una función clave en la Casa Blanca. Las redes sociales fueron una parte esencial de la estrategia: el carácter directo de las comunicaciones en las redes sociales presentó un fuerte contraste con la lejanía de las élites políticas.

Desde la perspectiva de la sociedad civil, últimamente da la impresión de que las fuerzas reaccionarias tienen los mejores memes. Se han apropiado del espacio, han captado la imaginación y han desplazado el debate de un modo que la sociedad civil simplemente no ha podido. La velocidad con que se impuso este proyecto sugiere la preexistencia de un vacío que nadie llenaba y de una demanda latente que no estaba siendo satisfecha. Aunque para la sociedad civil pueda ser una verdad difícil de aceptar, existe una demanda para esos mensajes racistas, sexistas y xenófobos que, más allá de su distancia respecto de la verdad, están siendo impulsados de modo tal de atender y enfocar el enojo público.

La sociedad civil debe entonces enfrentar la cuestión de porqué no ha podido utilizar las herramientas de las redes sociales con similar eficacia. ¿Puede la sociedad civil imaginarse ofreciendo algo que tenga la misma energía y vigor que *Breitbart*, pero que se mantenga fiel a y promueva los valores de la sociedad civil?

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

COMBATIR EL DISCURSO DEL ODIO: UN ESTUDIO DE CASO DE FINLANDIA

En tiempos en que el discurso político racista, sexista y xenófobo avanza, una función clave de la sociedad civil es organizarse y combatirlo, en particular cuando el Estado no lo hace. Kepa, miembro finlandés de AGNA, cuenta cómo el auge del discurso del odio contra los migrantes, y en particular contra los solicitantes de asilo procedentes de Irak, generó una respuesta concertada de la sociedad civil en 2016:

> *El mayor desafío para la sociedad civil finlandesa en 2016 fue el aumento del discurso del odio y el racismo y la creciente tolerancia por el mismo, o la falta de reacción en su contra por parte del gobierno y las autoridades. Algunos grupos consideran que el discurso del odio está justificado por la libertad de expresión. El discurso del odio se enfoca especialmente en los inmigrantes y solicitantes de asilo, pero también en cualquiera que hable abiertamente y actúe para ayudarlos y defenderlos, incluyendo muchas OSC, activistas, periodistas y políticos.*

Otro desafío relacionado con el discurso del odio es que si bien la acción por los derechos humanos, la paz, la justicia y la tolerancia es quizás más importante que nunca antes en Finlandia, el gobierno ha recortado la financiación de muchas OSC que hacen este trabajo. Existe el riesgo de que la sociedad civil responda a este desafío volviéndose más cauta en sus actividades y comunicaciones. Sin embargo, también ha habido valientes acciones conjuntas para detener esta tendencia.

El logro más importante de la sociedad civil en Finlandia fue una manifestación contra el racismo y la violencia realizada en septiembre de 2016. La manifestación, llamada “fin de juego”, reunió en la capital, Helsinki, a unas 15.000 personas, lo cual es un gran número en el contexto finlandés, para demandar una mayor reacción de los líderes políticos para detener el racismo y la violencia relacionada con él. La manifestación fue organizada en poco tiempo por un grupo de voluntarios, tras la muerte de un hombre que había sido agredido poco antes, durante una marcha neonazi. Con la manifestación, la gente quería transmitir el mensaje de que la “mayoría silenciosa” de los finlandeses no toleraría la situación y no se quedaría en silencio.

Durante la manifestación, e inmediatamente después, el primer ministro y otros líderes políticos condenaron el racismo y la violencia. El gobierno finlandés acordó que “las actividades de los movimientos extremistas violentos serán abordadas por medio de medidas legislativas y de otro tipo, además del fortalecimiento de los recursos de las autoridades públicas”.

H. “NOTICIAS FALSAS” Y “POLÍTICA POSVERDAD”

Para generar una respuesta, la sociedad civil tendrá que enfrentar una batería de tácticas deshonestas. A finales de 2016, el uso de la expresión “noticias falsas” se había convertido en un lugar común, al igual que la idea de que vivimos en la era política de la “posverdad”. Lyndal Rowlands, de la Agencia Inter Press, explica cómo funcionan las noticias falsas con el efecto de caja de resonancia[8]:

A veces podemos creer una noticia falsa porque confirma nuestra visión del mundo. Es posible que nadie nos corrija, porque la visión del mundo de la mayoría de nosotros se ha vuelto cada vez más polarizada debido a las burbujas de las redes sociales, lo que significa que ahora casi exclusivamente vemos noticias que confirman nuestras opiniones y valores previos.

Pero el tema de las "noticias falsas" es cada vez más difícil de explorar y dilucidar, porque el término ha llegado a ser utilizado de manera tan amplia que ha perdido el sentido. Originalmente acuñado para exponer historias falsas que beneficiaban a causas de extrema derecha, el término fue adoptado y apropiado por los mismos contra quienes era utilizado, al punto que acabó volviéndose posible descartar cualquier argumento o evidencia inconveniente tildándolo de "noticia falsa". Como nos dice Lyndal Rowlands:

Antes de que la mayoría de nosotros comenzáramos siquiera a preguntarnos qué eran exactamente las noticias falsas, el término era cooptado por la misma gente que posiblemente se beneficiara de las noticias falsas en su forma original. Pienso que es importante que la sociedad civil preste atención a este último desplazamiento sobre cómo se ha empleado la expresión "noticias falsas".

En los Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump utilizó su única conferencia de prensa como presidente electo para caracterizar a las fuentes que publicaban historias en su contra, incluida CNN, como proveedoras de "noticias falsas". Esta táctica ha continuado estando él en el poder. Además, ha sido imitada en otros contextos, como los de Camboya, Rusia y Venezuela. A nivel global, los sitios de extrema derecha que se hicieron famosos por publicar noticias falsas ahora descalifican diariamente las historias con las que están en desacuerdo tildándolas de falsas; incluso se ha descubierto que hay sitios que aparentan ser de corroboración de datos, y cuya existencia se publicita como destinada a desenmascarar noticias falsas, que son en sí mismo falsos. El resultado es un salón de espejos, en el cual el peligro es que la gente comience a pensar que no existe tal cosa como la verdad. Quizás esa fuera la intención desde un principio.

Lyndal Rowlands ofrece algunos indicios para discernir las noticias falsas:

En lugar de intentar definir qué son las noticias falsas, pienso que es mejor enfocarse en cómo discernir en qué noticias el público debe confiar y porqué. Algunas cosas que sugeriría serían asegurarse de que uno obtiene las noticias de una amplia variedad de fuentes, averiguar quién es el dueño de las compañías de medios de las que se obtienen las noticias, y asegurarse de verificar con una fuente primaria cualquier cosa que parezca inusual.

[8] Extracto editado de una entrevista realizada en febrero de 2017. La entrevista completa está disponible en http://bit.ly/2okM4lM.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

Joelle Hatem - Contra las violaciones

Los orígenes de la noticias falsas, continua sugiriendo Lyndal Rowlands, fueron al menos en parte económicos:

> *Durante la elección presidencial de 2016 en los Estados Unidos los sitios web "generadores de contenidos" crearon artículos que imitaban las noticias verdaderas pero eran en realidad totalmente inventados con la única intención de convertirse en virales para ganar dinero con los clics de la gente que visitaba sus sitios web.*

Las noticias falsas son ahora una industria en sí misma: una cantidad de sitios falsos que parecían estar basados en los Estados Unidos fueron rastreados hasta Macedonia, donde es posible ganarse la vida con ingresos por publicidad que se pagan por clic, generados por noticias políticas sensacionalistas que se vuelven virales. La economía de las noticias falsas es importante: si los sitios web generan ingresos y los anunciantes sienten que están llegando a un público, puede que haya pocos incentivos para controlarlas. Los gigantes de las redes sociales que se benefician con los ingresos por publicidad han sido acusados de lentitud para actuar contra las noticias falsas. En agosto de 2016, Facebook despidió al equipo editorial responsable de su módulo de noticias

más vistas, en parte debido a las críticas de sitios tales como Breitbart, que se quejaban de su sesgo en beneficio de fuentes de noticias más progresistas; la consecuencia fue que se eliminó el filtro humano contra las noticias falsas, las cuales por consiguiente se multiplicaron. También Google fue acusado de resaltar las noticias falsas en las búsquedas. Las empresas de redes sociales continúan negando su responsabilidad por los contenidos falsos, y afirman que son empresas de tecnología más que de medios.

También ha habido denuncias de que muchas historias falsas tienen sus orígenes en Rusia: el temor es que el Estado ruso esté promoviendo deliberadamente las noticias falsas como parte de una estrategia para desestabilizar a estados extranjeros y ayudar a los dirigentes más manejables a ganar poder. Entre las acusaciones contra el Estado ruso están las de interferir en las elecciones de los Estados Unidos e intentar influir sobre la opinión pública en Alemania y Suecia. En octubre de 2016, el gobierno de la República Checa anunció que estaba creando una unidad especial para luchar contra la propaganda pro-rusa que, según afirmó, se estaba difundiendo por las redes de sitios web títeres.

Pero independientemente de sus orígenes o motivaciones, los efectos se han visto en la esfera política. En los últimos tres meses del ciclo electoral de 2016 en Estados Unidos, las veinte historias falsas sobre las elecciones que tuvieron en Facebook mejor desempeño, medido por las veces que fueron compartidas y por las reacciones y comentarios recibidos, fueron vistas por y generaron la reacción de más personas que las veinte historias más vistas sobre las elecciones emanadas de sitios reconocidos y reputados. Alentada por su éxito en los Estados Unidos, la vanguardia de la autodenominada "derecha alternativa" se dispuso a falsificar identidades online francesas con el objeto de influir en las elecciones francesas de 2017 en favor de la candidata de extrema derecha. Como lo sugieren estos ejemplos, si bien cualquiera de las partes en conflicto podría explotar las noticias falsas, el uso mayor y más concertado de dichas técnicas lo han hecho las fuerzas políticas reaccionarias, que se han acostumbrado a sacar ventaja del sistema para lograr prominencia y amplificar su alcance. En una aguda ironía, estas fuerzas explotan la libertad de expresión para atacar los derechos.

Las noticias falsas no funcionan solas; logran su mayor impacto cuando son desplegadas como parte de una estrategia política más amplia. Es aquí donde la noción de "política posverdad" entra en juego. Si bien el término es a menudo relacionado con la campaña de Trump, quizás su ejemplo más fuerte se observó durante la campaña para el referéndum en el Reino Unido. La reivindicación que dominó el debate fue que el monto que - se decía - el Reino Unido gastaba en pertenecer a la Unión Europea sería aplicado al servicio de salud del país. Inmediatamente después de la votación, la promesa fue abandonada. Los políticos que en el contexto electoral habían hecho esta reivindicación, negaron luego haberla apoyado o creído en ella, y sin embargo no padecieron una reacción pública adversa importante. Algo interesante estaba sucediendo: los ciudadanos se mostraban capaces de practicar una especie de pensamiento doble, en la medida en que se mostraban deseosos de movilizarse en apoyo de reivindicaciones audaces pese a saber que probablemente fueran falsas, a la vez que de olvidar las falsedades y dejar de lado las promesas tan pronto como dejaran de ser útiles. En las encuestas de 2017 del Barómetro de Confianza de Edelman una de cada dos personas dijo que apoyaría a los políticos en los que confía incluso si sospechara que exageran la verdad.

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

Tanto las noticias falsas como la política posverdad tienen por lo tanto un aspecto de oferta y uno de demanda: no basta con ofrecerlas, la gente tiene que desearlas. Las noticias falsas funcionan porque satisfacen y confirman visiones del mundo, pero también porque son accesibles y divertidas. En una era de lapsos de atención breves, las noticias falsas parecen ir al grano de una manera que los importantes análisis políticos tradicionales no consiguen. Y llenan un vacío, porque la confianza en los medios ha declinado: los medios de comunicación, y en particular los medios tradicionales, nunca han gozado de menos confianza que en la actualidad.

Las noticias falsas se ajustan a la práctica del periodismo en la era de las redes sociales: el desplazamiento hacia contenidos online gratuitos ha hecho colapsar al periodismo tradicional. Los sitios web dependen de los ingresos de publicidad ligados a la cantidad de clientes virtuales, e impulsan el uso de ciberanzuelos para generar tráfico. En comparación, el periodismo de investigación, que supone gastos, pericia y tiempo, está en declive. Es posible observar aspectos positivos de este cambio: podría afirmarse por ejemplo que el periodismo se ha democratizado y que cualquiera de nosotros puede actuar como ciudadano periodista. El desafío es que se ha vuelto cada vez más difícil distinguir entre fuentes confiables y noticias falsas que parecen reales.

Podría decirse que aunque la terminología es nueva, las noticias falsas y la política posverdad están establecidas desde hace tiempo, y que la importancia que tuvieron los acontecimientos de 2016 fue que amplificaron e hicieron visible en estados de prominencia global lo que desde hacía tiempo venía siendo practicado en otros países. Ciertamente, aunque los ejemplos más conocidos provienen del norte global, es importante reconocer prácticas similares en Brasil, India y Sudáfrica, entre otros países del sur global, cuyos líderes también han sido acusados de abrazar la política posverdad.

En India, el Estado hizo en diciembre de 2016 el sorpresivo anuncio de que estaba retirando de circulación el 86% de los billetes con el objetivo frenar la economía informal, el delito y la corrupción. La movida causó gran perturbación: la escasez de efectivo provocó largas filas e incluso una cantidad de muertes fueron atribuidas a la imposibilidad de pagar honorarios médicos y al agotamiento de pasar períodos interminables esperando de pie. El impacto recayó de manera desproporcionada sobre los más pobres y excluidos, y hubo muchas quejas. Pero el primer ministro de India, Narendra Modi, es un afamado usuario de Twitter, respaldado por un ejército de seguidores online que atacan vigorosamente a quienes expresen su desacuerdo con él. Estas fuerzas de ataque se desplegaron en Twitter en defensa de la afirmación del primer ministro de que el proyecto de desmonetización era patriótico, de manera que quienes se opusieran debían ser antipatriotas o seguramente tendrían algo que ocultar. Que el proyecto fuera visto como un fracaso no era una opción; la verdad oficial pasó a ser que la política había sido un éxito, pese a que la gente podía ver la evidencia de lo contrario a su alrededor.

El ejemplo de la India deja en claro que mas allá de quién las utilice - el poderoso que extrae nuevas tácticas del libreto de la posverdad, el oligarca que busca agregar el ornamento del cargo político a su privilegio económico previo, o el humilde *troll* de Internet que goza de su momento de fama - las tácticas de la política posverdad y las noticias falsas quedan puestas al servicio del poder y en definitiva operan en desmedro del disenso democrático genuino y el ejercicio de la rendición de cuentas. También funciona como recordatorio de que el uso de noticias falsas para impulsar tácticas de posverdad puede formar parte de los intentos de estados y líderes

políticos para sesgar los espacios online en su favor, junto con otras tácticas que se analizan con más detalle en la segunda sección de este informe, tales como mantener ejércitos de *trolls* pagos y robots de propaganda automatizada, bloquear selectivamente las redes sociales, recurrir a la vigilancia en Internet y al jaqueo, acusar a los medios de parcialidad, y atacar y detener a periodistas y activistas online.

I. DE CARA AL FUTURO: HACIA UNA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL A LA NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

La respuesta de los políticos establecidos a la nueva política reaccionaria ha sido en gran parte de apaciguamiento: con la esperanza de contener la demanda, ceder mediante cambios de políticas un poco de terreno a, por ejemplo, el racismo, el sexismo o la xenofobia. Se trata de una estrategia arriesgada, que ha fracasado en varios contextos en que los partidos neofascistas han acabado obteniendo mayores beneficios. El peligro de este enfoque es que normaliza el racismo, el sexismo, la xenofobia y los ataques contra los derechos humanos y el internacionalismo, y reconoce como válidos y aceptables a los argumentos que se basan en ellos. Esto atiza las demandas en vez de apaciguarlas. Al mismo tiempo, la simple desestimación de puntos de vista como racistas, sexistas o xenófobos en ausencia de reconocimiento del enojo subyacente puede terminar alimentando la sensación de agravio.

Los estados no pueden derrotar a la actual marea reaccionaria; solo los ciudadanos comprometidos y activos pueden hacerlo. De ahí la pregunta de cómo puede la sociedad civil responder de una manera diferente a la crisis democrática actual.

Primero, es necesario comprender que el desplazamiento político actual no es la única tendencia. Cada vez que líderes de derecha carismáticos han movilizado apoyos, dominado la política y ganado elecciones, se ha generado una corriente contraria de apoyo a candidatos que defienden los derechos humanos y el internacionalismo, así como protestas, como las grandes movilizaciones en los Estados Unidos y otros países, muchas lideradas por mujeres, que se describen en la tercera sección de este informe. En función de los caprichos de los sistemas electorales, los bloques construidos por estos nuevos líderes pueden incluso no constituir una mayoría. Es importante recordar que el presidente Duterte llevó adelante su vigorosa ofensiva contra los derechos humanos después de llegar al poder con el 39% de los votos, y que en una carrera uno a uno el presidente Trump perdió el voto popular. Estos líderes no necesariamente crean ni representan a las mayorías; simplemente han sido capaces de conformar bloques de apoyo lo suficientemente grandes en comparación con los que se les oponen, que suelen estar divididos.

CADA VEZ QUE LÍDERES DE DERECHA CARISMÁTICOS HAN MOVILIZADO APOYOS, DOMINADO LA POLÍTICA Y GANADO ELECCIONES, SE HA GENERADO UNA CORRIENTE CONTRARIA DE APOYO A CANDIDATOS QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS Y EL INTERNACIONALISMO

RESUMEN DEL AÑO NUEVA CRISIS DEMOCRÁTICA

La respuesta que esto sugiere consiste en buscar nuevas maneras de construir bloques progresistas mayoritarios y de bases amplias. Esto nos obliga a preguntarnos cómo podemos desde la sociedad civil construir un movimiento, identificar y comprometer un potencial de participación inexplotado y hacer conexiones inusuales, incluso entre distintos tipos de grupos y diferentes partes de la sociedad civil y más allá. Por ejemplo, en muchos contextos resulta evidente que los jóvenes son más cosmopolitas e internacionalistas que la población en su conjunto, lo que sugiere la necesidad de buscar las conexiones que a menudo faltan entre las OSC establecidas y las redes de jóvenes.

Las grandes movilizaciones populistas de 2016 arrojan un dato positivo: demuestran que hay un enorme potencial de participación, aun cuando ese potencial está siendo utilizado en apoyo de causas reaccionarias. En cierto modo, dan prueba del poder de la democracia, en la cual el cambio, ya sea regresivo o progresista, puede lograrse en las urnas. Debe dejarse entonces de lado la idea de que votar en las elecciones o participar en el debate político no importa. Debe cuestionarse la apatía que en muchas democracias establecidas mantiene a mucha gente alejada de las urnas.

No hay razón por la cual el enojo que tantas personas sienten acerca de sus vidas y medios de subsistencia, así como su sentido de impotencia y separación respecto de las élites, deba servir únicamente para fines reaccionarios. De hecho, este debería ser territorio firme de la sociedad civil. Es necesario crear un argumento convincente para encauzar ese potencial de movilización cuya existencia ha quedado demostrada. Desde la sociedad civil debemos volver a participar en la batalla de las ideas.

La pregunta para la sociedad civil, y para las fuerzas progresistas en un sentido más amplio, es cómo utilizar herramientas y tácticas similares a las que usan las fuerzas reaccionarias, para capturar la imaginación popular y lograr que el enojo se movilice con fines progresistas. La sociedad civil ha ofrecido durante años un poderoso argumento acerca del neoliberalismo y la globalización, pero no ha tenido suficiente llegada. Ahora necesitamos preguntarnos cómo podemos usar las redes sociales de manera más creativa y energética para ofrecer mensajes que lleguen a destino.

Como parte de esto, el saliente Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, ha señalado que la lucha por ejercer los derechos de la sociedad civil debe ser una parte fundamental de la lucha por la democracia. Aquellos que quieran hacer del mundo un lugar mejor, y deseen defender la democracia donde está siendo amenazada, deben acoger a la sociedad civil y hacer del espacio cívico parte de su causa. El espacio cívico debe ser una cuestión central. También necesitamos utilizar y fortalecer los mecanismos de protección y apoyo a la sociedad civil cuando está bajo amenaza.

Con seguridad surgirán oportunidades de respuesta a medida que aquellos que han llegado al poder aprovechando la ola de enojo público demuestren que son incapaces de cumplir sus muchas y contradictorias promesas, y decepcionen a quienes depositaron en ellos sus esperanzas. Los líderes caudillistas que obtienen el poder vapuleando a las élites pero se rodean de élites económicas una vez que están en funciones corren el riesgo de verse arruinados por sus propias contradicciones. Además, el gobierno personalizado y centralizado al servicio de los intereses de las élites raramente es bueno para la salud a largo plazo de las economías. El disenso

no desaparece, y una vez activados, los agravios persisten y pueden ser reorientados. Cuando se vuelva evidente que no tienen soluciones para mejorar la vida de la gente, los nuevos líderes perderán su brillo. La gente buscará otras alternativas. Desde la sociedad civil ahora comprendemos el enojo, y somos cualquier cosa menos complacientes. Debemos estar listos para ofrecer alternativas y trabajar con el descontento a medida que los ciudadanos pierdan la fe en quienes tomaron prestados sus votos para llegar al poder.